

**Análisis de la política migratoria de Estados Unidos y su impacto en los países
del Triángulo Norte de Centroamérica: una visión securitiva desde el 11 de
septiembre de 2001-2010**

Alejandra Clavijo

Tutor: Javier Leonardo Garay

Universidad Externado de Colombia

Facultad de Relaciones Internacionales

Maestría en Negocios Internacionales

Bogotá, D. C., noviembre de 2015

Contenido

Introducción.....	3
Capítulo 1. Seguridad y migración: aproximación teórica desde la teoría constructivista y la Escuela de Copenhague.....	12
Capítulo 2. Identificación de los factores expulsos en los países del Triángulo Norte.....	32
Capítulo 3. Acciones políticas migratorias de Estados Unidos frente a la inmigración del Triángulo Norte.....	53
Capítulo 4 No entendimiento o entendimiento limitado de los factores expulsos.....	69
Conclusiones.....	88
Referencias.....	101

Introducción

La seguridad es una condición que debe ser provista por el Estado a sus habitantes junto con el desarrollo para lograr los niveles más altos posibles de bienestar general. Actualmente, los enfoques relevantes a tener en cuenta en un ámbito internacional con base en la seguridad pueden ser agrupados en dos grupos. Por un parte, los enfoques tradicionales realistas desarrollados a partir de los trabajos de Edward Carr, Robert Keohane, Hans Morgenthau y Kenneth Waltz, enfoques que establecen una estrecha relación entre la seguridad y lo militar, por lo que se hace referencia exclusivamente a la seguridad del Estado en un sentido westfaliano y, por otra parte, a nuevas corrientes que intentan generar nuevas herramientas teórico-conceptuales para poder así dar cuenta de aquellos fenómenos que adquieren una singular relevancia en este momento histórico, como el (re)surgimiento de los nacionalismos, las problemáticas económicas y ambientales, la vuelta a los conflictos religiosos o la inmigración internacional. Siendo este último objeto de estudio del presente trabajo.

Dentro de este último aspecto con el que se decidió trabajar, se destaca el aporte de Barry Buzan (1991, 1998) y los miembros de la Escuela de Copenhague, una escuela que tiene una contribución propia y un marco específico sobre la naturaleza de la seguridad. De acuerdo con lo anterior, la seguridad puede definirse como un movimiento que realiza la política más allá de las reglas de juego establecidas; dicho movimiento transforma un tema problemático en un tipo especial de política o en algo que está más allá de ella (Buzan, 1991 et al., p. 23). Los enfoques securitarios constructivistas de Guzzini o Wendt son muy cercanos al enfoque de Buzan y complementan la posición del último dándole un énfasis

singular al aspecto-requisito de la fundamentación de la securización en el discurso hegemónico.

En este marco se señalan una serie de implicaciones para la elaboración de la política internacional, es decir, se ha creado un paradigma específico dentro de los estudios de seguridad, el cual constituye un modo de ver la realidad internacional y los procesos de seguridad que en esta se desarrollan. Este enfoque rompe con las concepciones tradicionales de seguridad, superando las divisiones de la Guerra Fría (Beeson y Bellamy, 2003, p. 352), desarrollando un nuevo arquetipo sobre la problemática de la seguridad internacional en la globalización. Vale decir que este acercamiento no es un enfoque normativo, sino que es de tipo analítico, lo que hace distinguir entre ser parte del proceso de securización al decir “esto es una amenaza” o aceptando que “eso es una amenaza”.

De esta forma, como señala Buzan (1991), se llega a la securización de un problema determinado que, ubicado inicialmente como tal en una posición no relevante por lo que el Estado no se ocupa de este, pasa en una primera instancia por una politización, dado que el problema en cuestión se convierte en un tema de interés para la política del Estado, hasta securizarlo en un último movimiento.

El problema presentado en el contexto actual como una amenaza existencial para el Estado hace referencia a la migración, migración proveniente, particularmente, del Triángulo Norte; y esta cumple de la siguiente manera el proceso securitivo: en una primera instancia, pasa por una politización, por lo que el problema en cuestión se convierte en un tema de interés para la política del Estado, hasta securizarlo en un último movimiento, “el problema es presentado ahora como una amenaza existencial para el Estado” (Buzan, 1998).

Teniendo en cuenta que la migración abarca los desplazamientos de una persona o un grupo de personas desde su lugar de origen hacia otro y da lugar a la calificación de las personas como emigrantes o inmigrantes. Tal como lo señala Blanco (2000), la migración es aquel movimiento relevante que significa un cambio prolongado de entorno en todos los aspectos sociales y culturales para el sujeto. Los procesos migratorios recientes tienen un carácter global, y tienen sus raíces en la transformación de las comunidades actuales.

En este contexto surgen dos conceptos que son importantes para el desarrollo temático de este documento: 1. *Inmigrante*: hace referencia a aquella persona que abandona su territorio de origen para dirigirse a un territorio extranjero determinado, casi siempre en busca de mejoras en su calidad de vida; y 2. *Inmigración ilegal*: ingreso del inmigrante a un Estado por vía terrestre, aérea o marítima sin la debida autorización de este. O con ingreso legal al territorio, en el cual el inmigrante prolonga la duración de la estancia autorizada.

Los flujos migratorios modernos se generan según la situación económica, social y política de las naciones. Las limitaciones que presentan ciertos países en la provisión de bienestar a su población conforma el ámbito característico que actualmente da cabida a las migraciones (Massey, 1998). En los últimos veinte años la política migratoria de Estados Unidos se ha concentrado en medidas coercitivas que pretenden hacerle frente a la inmigración ilegal, que es catalogada como un problema de seguridad. Las políticas de inmigración establecen pautas de admisión basadas en objetivos sociales, humanitarios y económicos. Las políticas migratorias están articuladas en leyes de carácter nacional y su ejecución corresponde a agencias u organismos gubernamentales encargados de su aplicación.

Sin embargo, dicha política no ha dado los resultados esperados, de manera que, no solo no han logrado detener el flujo ilegal de personas, sino que también han generado tensiones y fricciones en las relaciones de los Estados Unidos con sus vecinos del Triángulo Norte¹ en Centroamérica.

El fenómeno migratorio del Triángulo Norte se ha caracterizado por varios factores. Históricamente las migraciones centroamericanas han tenido origen a causa de la desestabilización económica y política, la violencia generada por grupos delictivos como las maras y las pandillas, además de los desastres naturales que se presentaron en las décadas de los ochentas y noventas, especialmente en naciones como Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador (Massey, Pren y Durand, 2009).

UNODC (2012) afirmó que la ola de violencia desatada ocasionó que los índices de homicidios aumentaran más del doble en países como Honduras (92 por cada 100.000 habitantes) y El Salvador (69 por cada 100.000). Así, esta es una de las regiones más violentas del mundo en comparación con otros países como Belice (45 por cada 100.000 habitantes), Venezuela (49 por cada 100.00 habitantes). Además, la existencia de las maras y de organizaciones internacionales de crimen organizado se caracteriza por las luchas constantes por territorio, lo que aumenta los índices de inseguridad local. Este panorama de violencia afecta los derechos humanos de las masas populares y es el principal motivo para emigrar (UNODC, 2012).

En segundo lugar, Centroamérica se ha visto envuelta en guerras civiles que nunca han cesado de manera definitiva. La inestabilidad política ha dificultado la rearticulación de las instituciones y de redes de poder que enfrenten eficazmente las organizaciones

¹ Hace referencia a la integración de los países de Guatemala, Honduras y El Salvador.

delincuenciales y la corrupción. Por otra parte, los problemas económicos que presenta la región también se han constituido como motivo para migrar. En Centroamérica se concentra el mayor número de población pobre de América Latina. El porcentaje de población en situación de pobreza asciende al 33,1% en América Latina, mientras que en Centroamérica este es aproximadamente de 50,9% (FAO, 2011).

Estados Unidos genera una imagen de sueños de libertad y de oportunidades, que incentiva a muchas personas a cruzar las fronteras, teniendo o no en cuenta los procesos legales, para lograr el sueño americano².

Los desplazamientos de guatemaltecos, salvadoreños y hondureños a través de México hacia Estados Unidos han aumentado en un contexto de inseguridad y vulnerabilidad para los migrantes. Por su parte, el aumento de tránsito irregular de esta población ha ocasionado que las políticas de control fronterizo y migratorias estadounidenses se hayan endurecido cada vez más, dando continuidad a acciones como la retención y persecución de migrantes por todo el territorio estadounidense (Moreno, 2013).

La política migratoria de Estados Unidos se ha concentrado en iniciativas armamentistas y restrictivas en pro de preservar la seguridad nacional —es decir, militarizar la frontera—, que pretenden hacerle frente a la inmigración ilegal, la cual es catalogada como un problema de seguridad. Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos adoptó una visión radical frente al tema de la seguridad fronteriza y el control migratorio, en la cual, la intensidad de las políticas se focalizan en la frontera con México con la construcción de un muro y la clasificación del inmigrante como amenaza

² Construcción social sobre las posibilidades de tener éxito en los Estados Unidos (Lantzy, 2012).

para la seguridad nacional, ya que cualquier extranjero puede ser terrorista (Hernández, 2008).

El miedo aumentó los poderes de las autoridades fronterizas para expulsar de manera inmediata a cualquier inmigrante legal o ilegal que estuviera reseñado en sus antecedentes penales, lo que aumentó drásticamente el número de deportaciones y las acciones de persecución al interior del territorio norteamericano (Massey, 2012).

Al categorizar al inmigrante como amenaza se crearon en la sociedad espacios excluyentes, en los cuales se

originó el despertar de un electorado y la puesta en marcha de leyes restrictivas a la inmigración y políticas más duras en la frontera, que aumentaron el número de detenciones de inmigrantes y justificaron nuevas restricciones y acciones en la aplicación de la ley migratoria (Massey, 2012, p. 212).

Los debates migratorios se han dividido en dos posturas, por una parte las percepciones tradicionalistas republicanas y, por otra, la reforma integral de los demócratas hacia la comunidad latina que se encuentra indocumentada en Estados Unidos. En los ocho años del gobierno de George W. Bush no se avanzó en el tema migratorio. La resistencia política por parte de los congresistas republicanos ha perjudicado el desarrollo de la reforma migratoria.

Al contar con la mayoría de representantes en ambas cámaras (alta y baja), han dominado la toma de decisiones en cuanto a la reforma. De igual manera, frente a la propuesta del presidente Barack Obama, el *Grand Old Party* (GOP) se opone radicalmente a la regularización de los migrantes, alegando que la decisión que toma el gobierno terminaría cumpliendo con los requisitos de la figura como la amnistía.

Las propuestas antiinmigrantes se han mezclado con las diferentes esferas del Estado. Ya no solo es un tema federal sino también de agentes locales. El argumento en el

que se basan funcionarios y senadores norteamericanos es que: aparentemente el Gobierno Federal no está tomando ningún tipo de acciones para contrarrestar y detener la migración ilegal y que son los estados fronterizos y con mayor presencia de población de origen latino los que sufren las consecuencias con la presencia de indocumentados (Alveranga, Arias y Díaz, 2013, p. 56).

Estas propuestas articulan los mismo objetivos restrictivos contra los inmigrantes, como la criminalización de la estadía indocumentada, aplicación de penas civiles, administrativas o penales en contra de los empleadores privados y de los inmigrantes indocumentados contratados por aquéllos, sanciones a quienes hospeden o alquilen inmuebles a indocumentados y la limitación del uso de servicios o beneficios públicos (CNDH, 2011).

Como consecuencia de todo lo anterior, el objetivo de esta investigación consiste en demostrar que la política restrictiva no ha podido controlar efectivamente la inmigración ilegal y, además, genera choques con los países del Triángulo Norte centroamericano, que, o son incapaces de detener el fenómeno, o no cuentan con las herramientas estructurales para evitar la emigración de sus nacionales.

Siendo un tema de actualidad y de gran importancia en el desarrollo de las relaciones bilateral, ya que

las migraciones también cobran importancia en el actual contexto global subregional: se han constituido en una manifestación de la transnacionalización del istmo centroamericano, por el hecho de que la emigración a países de fuera de la región, como el desplazamiento, permanente o temporal, entre países al interior de la zona, revelan las aristas más novedosas de un proceso de transnacionalización de la fuerza laboral como también de los mecanismos de reproducción y sobrevivencia social (Morales, p. 48).

Dentro de los alcances de la investigación, se identifica cómo los factores expulsores como la violencia y la desestabilización económica han influenciado en las decisiones migratorias de la población del Triángulo Norte. Asimismo, se evidencia cómo las políticas y planes propuestos por Estados Unidos se concentran en la aplicación de medidas que tienen como objetivo primario proporcionar la seguridad fronteriza, obviando los factores que causan las migraciones.

Las reformas migratorias promueven la seguridad fronteriza y el aumento de la militarización, así como las deportaciones masivas. Las leyes restrictivas que cada vez aumentan más, ya no solo son un tema federal, también han involucrado actores locales, por ejemplo, han aumentado las leyes y políticas antiinmigrantes promovidas por los estados, como los estados de Arizona y California.

También, el aumento de los controles migratorios ha generado que los migrantes se vean obligados a usar otras rutas de cruce, utilizando medios de transporte no seguros, así como el uso de “polleros” y redes ilegales para lograr el tránsito ilegal hacia el sueño americano. Estos factores no son considerados en la formulación de las de las políticas migratorias estadounidenses (Herrera, González, y Rocha, 2009). El énfasis se ha puesto en la seguridad de los agentes, aumentando el presupuesto y personal de la patrulla fronteriza y demás instituciones que deben salvaguardar la seguridad nacional.

La hipótesis de esta investigación es: *la política migratoria de Estados Unidos no ha logrado detener ni mitigar el fenómeno de la inmigración ilegal proveniente de sus vecinos del Triángulo Norte debido, por un lado, a problemas de formulación de las medidas y, por el otro, a factores expulsores de los países fuente.*

Para demostrar la hipótesis, en la presente investigación se tendrán en cuenta entre otros modelos de datos, los aportados por Homeland Security, por la Oficina de Relaciones Exteriores de Estados Unidos de América, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), así como diferentes trabajos científicos relacionados con el tema en cuestión. Además, se analizarán los siguientes puntos: la gravedad y complejidad de los problemas de seguridad (maras, narcotráfico, crimen organizado) existentes en los países de origen que han adquirido un carácter transnacional, seguido de las contradicciones evidenciadas entre los objetivos de la política y la instrumentalización de los inmigrantes ilegales al interior de los Estados Unidos y, por último, el entendimiento limitado de los factores migratorios de los países de origen

Para demostrar la hipótesis, esta investigación se divide en cuatro capítulos. En primer lugar, se desarrolla una aproximación teórica con base en los diferentes postulados sobre los conceptos de seguridad, específicamente con base en la Escuela de Copenhague y la teoría constructivista ante la necesidad de considerar el diálogo que se ha llevado a cabo a la hora de delimitar y definir la migración como fenómeno de seguridad, en comparación con el contexto actual, el cual se refiere al enfoque de la política migratoria estadounidense. En el segundo capítulo, se identifican y se amplían los factores expulsores que influyen en los movimientos migratorios de la población del Triángulo Norte hacia territorio estadounidense.

En el tercer capítulo, se reseñan las políticas del gobierno norteamericano frente al fenómeno migratorio proveniente de los países del Triángulo Norte, identificando su progreso y resultados en su desarrollo. En el cuarto capítulo, se expone la posición actual del gobierno norteamericano frente a la inmigración y el accionar de las relaciones

bilaterales con los países del Triángulo Norte, así como los discursos políticos y las reformas migratorias estadounidenses, con el fin de identificar las contradicciones entre los objetivos de las políticas y la instrumentalización de estas.

Capítulo 1. Seguridad y migración: aproximación teórica desde la teoría constructivista y la Escuela de Copenhague

En este capítulo se realiza una aproximación al aporte de la Escuela de Copenhague sobre los estudios de seguridad. En esta se explica la evolución del concepto de seguridad como eje principal para la comprensión de la discusión política que se genera en Estados Unidos con base en las reformas migratorias en las que se ven implicados ciudadanos latinoamericanos provenientes del Triángulo Norte.

Actualmente, los enfoques de seguridad pueden agruparse en dos grupos. En primer lugar, las perspectivas tradicionales realistas, las cuales instituyen una relación: seguridad-militar, haciendo referencia a la seguridad del Estado en un sentido westfaliano; en segundo lugar, las nuevas corrientes que generan elementos teórico-conceptuales que ayuden a entender los fenómenos actuales como las problemáticas económicas, sociales y ambientales, el resurgimiento de guerras religiosas, el nacionalismo y las migraciones internacionales. Siendo este último objeto de estudio de esta investigación.

Dentro de las nuevas corrientes, se destaca la contribución de la Escuela de Copenhague. Esta señala que se ha creado un paradigma específico dentro de los estudios de seguridad, generando así una serie de implicaciones para la elaboración de la política internacional, —se podría decir— que este paradigma constituye un modo de ver la realidad internacional y los procesos de seguridad que en esta se desarrollan. La Escuela se aparta de las concepciones tradicionales de seguridad y desarrolla un nuevo paradigma sobre la problemática de la seguridad internacional en la globalización.

1.1 Teoría constructivista

La teoría constructivista parte de la idea de que las estructuras de la política internacional son básicamente sociales, y no únicamente materiales o tangibles, refutando las teorías clásicas (Lallande, s.f.). Los argumentos en contra de estas teorías, particularmente el neorrealismo, se basan en que la “autoayuda” y las políticas de poder no son producto de la anarquía, puesto que el sistema internacional se desarrolla a través de un proceso y no de una estructura. Es por esto que “la anarquía jugaría un papel ‘permisivo’ en el análisis constructivista, pero no tendría el rol ‘determinista’ que le asignan los neorrealistas” (Carvajal, 2009, p. 206). Para Wendt (1992) la anarquía no está dada automáticamente determinando el comportamiento egoísta de los Estados, es más bien el significado que los Estados le quieran dar.

Por otra parte la propuesta constructivista se aparta de los realistas y liberales en tres maneras:

1. Los realistas y liberales asumen que los actores son egoístas e individuales, mientras que los constructivistas consideran que los actores son sociales, ya que sus identidades son construidas en el entorno social el cual evoluciona.
2. Los constructivistas afirman que el interés está en función de la identidad a través de un aprendizaje social y no por elementos exteriores (materialistas) que determinan el interés.

3. Los liberales ven la sociedad internacional como un espacio en el que los actores toman elecciones estratégicas, en cambio, los constructivistas ven la sociedad internacional como un espacio que transforma a los actores en agentes sociales políticamente informados (Frasson-Quenoz, 2015).

El constructivismo propone la idea colectiva en las relaciones entre Estados, en la cual el interés propio y el interés colectivo son efectos de un proceso de identificación con el otro (Wendt, 1992), esta teoría no se limita a considerar los procesos que se implementan en el orden social, sino que también estudia las normas a partir de las cuales se desarrollan los procesos actuales (Frasson-Quenoz, 2015), ya que las Relaciones Internacionales (RI) influyen a las identidades nacionales y estructuras sociales internas en su comportamiento e intereses.

Los postulados de la teoría constructivista ven el interés nacional como el cúmulo de creencias, normas y otros, que en conjunto crean las identidades nacionales (Quintero, 2014). Por su parte Wendt (1999) menciona dos postulados del constructivismo:

1. Que las estructuras de la asociación humana están determinadas principalmente por ideas compartidas más que por fuerzas materiales.
2. Que las identidades y los intereses de los actores internacionales están contruidos por esas ideas compartidas en lugar de estar dados de manera natural (Wendt, 1999, p. 1).

La teoría constructivista indica que la gente se relaciona con los objetos según el significado que les represente, es decir, los Estados actúan según sus intereses, actúan de una forma con sus amigos y otra con sus enemigos. Por ejemplo, la potencia militar de Estados Unidos tiene un significado diferente para Cuba que para Canadá (Wendt, 1992).

Por tanto, es preciso señalar las variaciones que se presentan en las relaciones internacionales, en este caso, entre Estados Unidos y América Central, puesto que

comparten escenarios en los que se generan fenómenos específicos que resultan ser un problema o no en estos territorios, tal como lo señala Lowenthal (2007)

La naturaleza y la dinámica de las relaciones estadounidenses con México, América Central y los países caribeños cada vez son más distintas de las que se dan con el resto de la región. Estados Unidos se ha convertido en una influencia económica, cultural y política aún más abrumadora en toda su región fronteriza, sobre todo como resultado de una migración masiva desde 1965, de dimensiones históricas sin precedentes. Del mismo modo, las grandes y crecientes diásporas mexicana, centroamericana y caribeña en número cada vez mayores en las diferentes regiones de Estados Unidos están cambiando los contornos de las relaciones entre este país y sus vecinos más cercanos (p. 6).

Por otra parte, existen múltiples formas que tienen los Estados para entender la anarquía del sistema internacional. La anarquía tiene un significado “realista” para la acción estatal: estar inseguro y preocupado por el poder relativo, teniendo este significado en virtud de prácticas colectivas que inducen inseguridad (Wendt, 1992).

Las prácticas de la soberanía transformaron la manera en que se comprende la seguridad y la política del poder de tres maneras. En primer lugar, los Estados definirán su seguridad con base en la preservación de los derechos de propiedad. En segundo lugar, al internalizar las normas de soberanía los Estados asimilarán los derechos territoriales de los otros. Por último, a medida del grado de socialización entre Estados, entenderán que su soberanía depende del reconocimiento de otro Estado, lo que puede aumentar la confianza en el tramado institucional de la sociedad internacional (Wendt, 1992). El constructivismo entiende que los recursos de poder de los Estados y los intereses ligados a la riqueza y al poder deben ser contextualizados en función de las entidades e intereses estatales (Vitelli, 2014). Considera que gracias a las realizaciones de identidad de los elementos del sistema es posible crear un tipo de seguridad colectiva capaz de preservar los intereses de los actores internacionales (Mercer, 2014). Lo que a su vez indica que la base de la seguridad de la teoría constructivista parte de la identidad.

Es por esto, que para esta teoría las identidades estatales determinan el papel de cada Estado, ya que los intereses y normas están evolucionando constantemente de acuerdo con su contexto histórico, político y social. Los ambientes de los Estados son importantes elementos ideacionales que dan forma a las identidades estatales, a los intereses de seguridad y a las políticas de defensa de los estados (Vitelli, 2014).

No obstante, resulta “fútil la búsqueda de conceptos que son ‘correctos’ en el sentido que corresponden a la realidad, no más sea porque la ‘realidad’ en sí misma se construye socialmente, *inter alia*, por medio de conceptos tales como ‘paz’ y ‘seguridad’” (Moller, 2000). Por tanto, es pertinente analizar el discurso de la seguridad como un complejo “acto de discurso”, es decir, explorar la evolución de “securitizacion” y “desecuritizacion” (Waeber, 2004).

En función de lo expuesto, el concepto de seguridad se expande ampliamente, ya que no solo pertenece exclusivamente al Estado, sino también a la identidad, por tanto se vincula con la seguridad societal (Moller, 2000). Al observar que la seguridad no tiene solo un objeto de referencia (Estado), sino que incluye en su estudio otros actores como grupos o colectividades, se toman en cuenta los aportes de la Escuela de Copenhague para profundizar estos temas.

1.2 Escuela de Copenhague

La Escuela de Copenhague se basa en tres pilares: 1. *Securitisation*; 2. *Sectors* (Sectores) y 3. *Regional security complexes* (complejos de seguridad regional). El termino *sectors* se refiere a la distinción de la seguridad en el ámbito político, económico,

ambiental, militar y societal³. El termino *regional security complexes* hace referencia a la importancia del nivel regional en el análisis de seguridad (Waever, 2004).

En cuanto al término de *Securitisation*, hace referencia a “seguridad” que en últimas es el concepto clave en esta investigación, y por tanto, el que se pretende desarrollar. Es por esto, que resulta relevante definir el término “seguridad” y lo que es “un asunto de seguridad”. Según Waever (2004) las funciones reales del término se encuentran en la práctica política:

In security discourse, an issue is presented as posing an existential threat to designated referent object (traditionally, but not necessarily the state). The designation of the threat as existential justifies the use of extraordinary measures to handle it. The invocation of security has been the key to legitimizing the use of force, and more generally opening the way for the state to mobilize or to take special power. “Security” is the result of a move that takes makes politics beyond the established rules of the game and frames the issue as above normal politics (Waever, 2004, p. 9).

La Escuela, influida por las teorías del análisis del lenguaje, dirigió sus esfuerzos hacia un estudio de las implicaciones discursivas en la disciplina de los fenómenos de las relaciones internacionales. La aclaración del propio término “seguridad” y de algunos otros es muestra de esto. Propone el término de seguridad en un sentido más especializado que el que se usa de manera corriente, como adjetivo que designa aquello que está libre de peligro o daño o con la posibilidad de correr algún riesgo. Más bien se lo asume como una calificación que designa la posibilidad de que numerosos gobiernos delimiten o concierten cuándo deben realizarse acciones prioritarias.

Como definición de “seguridad” que contribuye la Escuela de Copenhague se tiene que:

³ Relativo a la sociedad considerada en su conjunto.

[...] la seguridad consiste en liberarse de las amenazas y ser capaz —sean los Estados o las sociedades— de mantener su independencia en lo que se refiere a identidad y a su integración funcional frente a fuerzas de cambio consideradas hostiles (Buzan, 1991, p. 432).

Buzan et al. (1998) afirmaron que esta necesidad de la conceptualización de la seguridad debe ser amplia y no limitarse al tratamiento de una sola problemática.

The need is to construct a conceptualization of security that means something much more specific than just any threat or problem. Threats and vulnerabilities can arise in many different areas, military and nonmilitary, but to count as security issues they have to meet strictly defined criteria that distinguish them from the normal run of the merely political (Buzan, Waever y Wilde, 1998, p. 5).

Los procesos de securitización se deben a los mecanismos por los cuales se incorpora un tema de seguridad y los intereses dada una situación. Según (Buzan et al, 1998) estos procesos se dividen en tres clases: subjetivo, objetivo e intersubjetivo. El primer término se refiere cuando algunos de los actores —estatales o no— declaran un asunto de seguridad. El segundo, se desarrolla cuando se trata de amenazas reales. Y el último término, implica la referencia a los consensos societales o estatales de seguridad.

Esta aproximación supone, más que un enfoque de miras normativas, una posibilidad analítica sobre la manera en que se da el proceso de securitización: la posibilidad de asumir un fenómeno u otro como una amenaza potencial o real (Boggione, 2012).

Puesto que la seguridad se veía primordialmente en términos de poder nacional, tanto por parte de los políticos como de los estrategas, la tónica dominante era de una uniformidad poco constructiva. El sector de la academia para el que el concepto de seguridad era más relevante estaba enclaustrado en su visión de la seguridad desde el punto de vista del poder. Los políticos nacionales estaban obligados, y lo siguen estando, tanto por su posición como por la naturaleza de sus poderes y responsabilidades, a tomar una postura predominantemente nacionalista. Por otro lado, no existen apenas políticas independientes por encima del nivel nacional. De manera que predominaba una situación en la que el impulso primario, tanto de la política como de los analistas, se movía en una dirección contraproducente, en la

que los actores principales, tanto en la teoría como en la práctica, estaban encasillados en sus papeles por unas tradiciones profundamente enraizadas y extremadamente institucionalizadas (Buzan et al., 2008, pp. 5-6).

La seguridad es un movimiento que realiza la política, más allá de las reglas de juego establecidas, dicho movimiento transforma un tema problemático en un tipo especial de política o en algo que está más allá de ella (Buzan, 1991 p. 23). Los enfoques securitarios constructivistas de Guzzini o Wendt son muy cercanos al enfoque de Buzan y complementan la posición del último dándole un énfasis singular al aspecto-requisito de la fundamentación de la securitización en el discurso hegemónico.

Se ha revisado este postulado teórico para orientar la observación del fenómeno de seguridad migratoria de latinoamericanos en los países europeos, ya que, según la teoría constructivista “el acto de enunciación realizado desde el poder constituye el paso necesario para instituir un fenómeno determinado como una amenaza existencial frente a un objeto referente” (Boggione, 2012, p. 3). En función de esta explicación sobre la propuesta teórica, se puede hacer una revisión sobre las particularidades del fenómeno dirigido a la migración del Triángulo del Norte de Centroamérica hacia Estados Unidos. Esto es posible ya que, de manera muy similar a lo que ocurre en los países de mayor recepción de migrantes en Europa, Estados Unidos ha seguido un modelo regido por una lógica parecida en cuanto a la problemática de seguridad. Esta lógica configura varias particularidades:

[...] leyes que incrementan el poder de las autoridades migratorias o que criminalizan las migraciones, endurecimiento del cruce de fronteras y en el otorgamiento de visas, accionar de partidos políticos y de grupos anti-inmigrantes, exclusión a sistemas de salud y educación, restricciones y cupos a la inmigración, o lagunas graves en materia de gestión migratoria. A través de estas medidas, entre otras, se observa cómo se genera la diferencia que concibe en última instancia las exclusiones e inclusiones que terminan definiendo la identidad del inmigrante como el Otro, amenazante —ahora desde lo interno— para la sociedad (Boggione, 2012, p. 25).

Que algo sea interpretado como asunto de seguridad significa que es algo inmediato y peligroso que se aborda con la lógica de la necesidad y las medidas extraordinarias, ya que la seguridad logra un estatus de urgencia y prioridad (Waeber, 2004). Es por esto que “en el caso de la seguridad, la discusión se centra en liberarse de la amenaza” (Buzan, 2008, p. 19).

La amenaza varía según los diferentes sectores en los que se analice. Por ejemplo, en el sector militar, el objeto de referencia es generalmente el Estado, aunque también pueden ser otro tipo de entidades políticas. En el sector político, las amenazas existenciales se definen tradicionalmente por cualquier cosa que cuestione el reconocimiento, legitimidad o autoridad del Estado. En el sector social, el objeto referente son las grandes identidades colectivas que pueden funcionar independientemente del Estado (Buzan et al., 1998). La Escuela aboga por aceptar las colectividades humanas como “objetos de referencia” de la seguridad, y la seguridad aplicable a los colectivos es llamada seguridad societal (Moller, 2000). En la teoría de las relaciones internacionales RI este concepto ha sido comúnmente relacionado con la identidad, “correspondiendo a la actual securitización de fenómenos tales como las migraciones o el imperialismo cultural” (Moller, 2000).

El concepto de organización en el sector societal es la identidad, por tanto, existe inseguridad en la sociedad cuando las comunidades de cualquier clase definen un fenómeno como amenaza para su supervivencia como comunidad. En el sector societal los objetos de referencia son tribus, clanes, naciones, civilizaciones, religiones y razas (Buzan et al, 1998).

Los temas más comunes que se consideran como amenazas a la seguridad societal son: en primer lugar las migraciones (la población X está siendo invadida o diluida por la

influencia de la población Y; y la identidad de X está cambiando por una modificación en la composición de la población); en segundo lugar se encuentra la competencia horizontal (aunque la población X siga viviendo en su territorio, está cambiando su forma de vivir por la preponderante influencia cultural y lingüística de la cercana cultura); por último, la competencia vertical (la población X ya no se verá como tal porque existe un proyecto integrador que la está llevando hacia una nueva identidad) (Perni, 2010).

La sociedad puede responder de distintas maneras ante este tipo de amenazas, por ejemplo, llevar el tema migratorio a nivel político como se ha hecho en Europa y Estados Unidos, incluyéndose en la agenda de Estado para dar soluciones legislativas o potencialmente militares.

1.2.1 Sobre la migración como fenómeno de seguridad

Las migraciones no se originan en todos los lugares, sino en zonas específicas y se dirigen hacia zonas determinadas. Según Micolta, citando a Romero, (2005)

[...] lejos de ser el fruto de la suma de decisiones individuales, la migración obedece a las divergencias estructurales y resulta de las relaciones de explotación impuestas desde el exterior. La unidad de análisis no son ya los individuos, sino la misma corriente migratoria (p. 25).

El hombre es un ser sedentario por naturaleza, principalmente por razones económicas (Micolta, 2005, p. 68); y en la decisión de emigrar el sujeto actúa de forma racional, con miras a maximizar las ventajas de ese proceso.

El fenómeno migratorio constituye un proceso que afecta a diferentes sujetos y colectivos humanos. A nivel internacional las migraciones se conceptúan como una forma de capital humano (Micolta, 2005). Las dinámicas migratorias obedecen a los cambios de

áreas de alta inseguridad política, social, o económica hacia las que los inmigrantes perciben como áreas de baja inseguridad (Perni, 2001).

Buzan define la seguridad desde una ampliación del concepto, analizando cómo una sociedad o un grupo de personas designa, o no, a algo como una amenaza, y el proceso por el cual son construidas las amenazas tanto militares como económicas, societales o ambientales (Perni, 2001). Este acercamiento no es un enfoque normativo, sino que es de tipo analítico, lo que hace distinguir entre ser parte del proceso de securitización al decir “esto es una amenaza” o aceptando que “eso es una amenaza”.

El interés en Buzan radica en ver la manera en que son construidas las amenazas y aceptadas como problemas de la seguridad. Tal es el caso de tipificar como delito la residencia irregular de todo extranjero en un territorio. Es por ello que este enfoque es esencial en este análisis, en la medida en que brinda herramientas relevantes para analizar cómo y por qué se construye la nueva agenda de seguridad.

Como explica Buzan (1998), “security is the move that takes politics beyond the established rules of the game and frames the issue either as a special kind of politics or as above politics” (p. 23), “la seguridad es el movimiento que lleva a la política más allá de las reglas de juego establecidas y enmarca el problema, ya sea como un tipo especial de política o más allá de ella” (traducción propia) y descansa en lo que la teoría del lenguaje denomina *speech act* o acto de enunciación.

De esta manera, como señala Buzan (1991), se llega a la securitización de un problema determinado que, ubicado inicialmente como tal en una posición no relevante por lo que el Estado no se ocupa de este, pasa en una primera instancia por una politización, por

lo que el problema en cuestión se convierte en un tema de interés para la política del Estado, hasta securitizarlo en un último movimiento, “el problema es presentado ahora como una amenaza existencial para el Estado”. Lo mismos pasos, aunque en un curso inverso, habría que seguir para desecurizar el problema.

En el mismo sentido se pronuncian otros autores como Stefano Guzzini, Ole Wæver y Alexander Wendt, al adoptar una teoría securitaria constructivista, teoría según la cual el acto de enunciación realizado desde el poder constituye el paso necesario para instituir un fenómeno determinado como una amenaza existencial frente a un objeto referente.

En función de esto, en este caso de estudio, este instrumental teórico brinda un nuevo foco para observar cómo en los Estados Unidos, país receptor de inmigrantes del Triángulo Norte de Centroamérica, las migraciones son sometidas a esta lógica de la seguridad, tanto desde el Estado como desde la sociedad civil a través de leyes que incrementan el poder de las autoridades migratorias o que criminalizan las migraciones, el endurecimiento del cruce de fronteras y el otorgamiento de visas, accionar de partidos políticos y de grupos antiinmigrantes, exclusión a sistemas de salud y educación, restricciones y cupos a la inmigración.

En la securitización de las migraciones la dialéctica de inclusión y exclusión “aleja los inmigrantes de los nativos sobre todo en términos culturales: los nativos creen el uno en el otro como duplicados culturales y desconfían del inmigrante como el *otro cultural*” (Perni, 2010, p. 9).

A través de estas medidas, entre otras, se observa cómo se genera la diferencia que concibe en última instancia las exclusiones e inclusiones que terminan definiendo la identidad del inmigrante como el otro amenazante —ahora desde lo interno— para la sociedad, al mismo tiempo que cuestiones fundamentales que atañen a aquellos inmigrantes que hacemos mención, y que se refieren a la defensa y protección de los derechos humanos, se ven ahora eclipsados por el discurso de la seguridad.

Ahora bien, en el ámbito de las políticas, la “seguridad” se acerca más al concepto de “riesgo” (Waeber, 2004). Por tanto, la inmigración, al ser un proceso social que atraviesa la vida de millones de personas, está definido por relaciones de poder basadas en la asignación de riesgos (Beck, 2006). Entonces ¿por qué la inmigración sigue siendo leída a través del prisma de la seguridad? ¿Cómo se puede explicar la fuerza de un discurso que a través del “*il faut défendre la société*” —hay que defender la sociedad— vincula al crimen, al desempleo, al terrorismo, al fanatismo y a la inmigración a pesar de que no existan estadísticas ni datos fiables que den cuenta de esta correlación? (Bigo, 2009).

El discurso que hace de la inmigración internacional un objeto referente de la seguridad, es decir, que la securitiza, proviene de una tecnología política propia de la gobernabilidad contemporánea, que en su intento de moldear la figura polivalente del inmigrante al calor del riesgo, refleja los intereses de un modelo particular de relaciones sociales, en la mayoría de los casos sin respetar los derechos humanos ni los principios del Estado de derecho.

A partir de la guerra contra el terrorismo, desencadenada por los atentados del 11 de septiembre de 2001, la seguridad militar se enfoca netamente en el terrorismo. Por

ejemplo, en Estados Unidos, *Homeland Security*⁴ ha cobrado mayor importancia en la creación de políticas (Waever, 2004). Además, la migración ha sido interpretada como un tema de seguridad que combina la policía, las patrullas fronterizas, la lucha contra el crimen organizado internacional y el conflicto entre civilizaciones (Waever, 2004)

Así, se desarrollan conceptos y clasificaciones que incorporan presupuestos normativos para establecer que los inmigrantes del Triángulo Norte Centroamericano, son un tipo de población peligrosa y amenazante para la sociedad estadounidense, teniendo en cuenta que “los sistemas de clasificación son menos unos instrumentos de conocimiento que unos instrumentos de poder, subordinados a unas funciones sociales y orientados, de forma más o menos abierta, hacia la satisfacción de los intereses de un grupo” (Bourdieu & Wacquant, 2008, p. 39).

Desde la perspectiva de seguridad, el hecho de presentarse cualquier amenaza ha desencadenado que los procesos migratorios se encasillen en el fracaso de la integración de los inmigrantes con la nueva cultura y el proceso de adaptación de estos. Tal como lo señalan Nagore y Silva (2008), los argumentos que justifican esta postura se deben, en primer lugar, a una postura alarmista en el aumento de los inmigrantes a algunos países europeos y a Estados Unidos, y en segundo lugar, a las objeciones de las autoridades locales en el aumento de los recursos tanto públicos como privados en educación, salud, vivienda, etc., para cubrir las necesidades de los nuevos residentes.

Es por esto, que de acuerdo con las posturas anteriores, la teoría que más aporta a esta investigación, deviene de la Escuela de Copenhague al subrayar la necesidad de establecer la relación entre seguridad nacional y los diferentes fenómenos transnacionales

⁴ Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

como la migración que son señalados como amenaza y el proceder de los Estados frente a estas “problemáticas”, ya que, en el contexto actual, se observa que los fenómenos migratorios se detectan bajo la hipótesis fundamentada de que los migrantes suponen ser una amenaza por sus diferencias culturales y geográficas (Nagore y Silva, 2008).

Queda entonces preguntarse hasta qué punto una sociedad como la estadounidense, que necesita la mano de obra inmigrante para su aparato productivo, puede continuar con un discurso que relaciona la cuestión migratoria con pobreza, delincuencia e ilegalidad, íntimamente ligado a políticas basadas en la inquietud y la violencia. Estos efectos ponen en una encrucijada a la población inmigrante, por un lado aumenta su vulnerabilidad por el rechazo del gobierno americano y la violencia en las fronteras, y por el otro, los factores de que influyeron en la decisión de migrar. Las migraciones centroamericanas actuales obedecen en su mayoría a los altos índices de violencia, desempleo, pobreza y corrupción (Massey, 2012). Estos aspectos se ampliarán en el siguiente capítulo con el fin de analizar los factores expulsores y su incidencia en el aumento del flujo migratoria hacia Estados Unidos.

Capítulo 2. Identificación de los factores expulsores en los países del Triángulo

Norte

En el anterior recorrido teórico se evidenció que las migraciones son definidas como un problema de seguridad nacional por los Estados. Actualmente, la visión que se tiene de las migraciones se entiende como amenaza. Estas cuestiones refieren a la defensa del propio Estado que convergen en buscar lo mejor para sí mismo, por lo que la situación del migrante, en cuanto a derechos humanos, se ve eclipsada por el discurso de seguridad.

En los últimos años, los países del Triángulo Norte de Centroamérica experimentan fenómenos de violencia que superan la media de los países latinoamericanos. Estos hechos delictivos son perpetrados por pandillas, maras, crimen organizado y narcotraficantes. Sus principales causas son los cambios de rutas del flujo de drogas y migrantes, la corrupción, la desigualdad social y económica, pobreza, inestabilidad política —como el golpe de estado a Honduras en 2009— y el aumento en las deportaciones de criminales desde Estados Unidos hacia Centroamérica.

Los países del Triángulo Norte presentan niveles extremos de violencia e inseguridad, ya que, según la Organización Mundial de la Salud un país que presenta una tasa de homicidios por encima del umbral de 10, padece una epidemia de violencia, situación reflejada en la tasa de homicidios⁵ de los países del Triángulo Norte, en Guatemala es de 39,9 por cada 100 mil habitantes, en Honduras es de 90,4, en El Salvador es de 41,2.

⁵ Tasa de homicidios para el año 2012.

Estos factores agravan la situación social presentando un panorama poco alentador a la población civil, por lo que en últimas, los individuos deciden migrar a otros países en busca de mejores oportunidades alejándose del terror que provoca la violencia. Por tanto, en este capítulo, se pretende dar una visión más completa acerca de la situación actual de los países del Triángulo Norte, identificando factores expulsivos que influyen en los movimientos migratorios de esta población hacia territorio americano.

2.1 Teoría-realidad

Históricamente las migraciones centroamericanas han tenido origen de acuerdo con la desestabilización económica y política, además de los desastres naturales que se presentaron en las décadas del ochenta y del noventa, especialmente en naciones como Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador (Massey, Pren y Durand, 2009). Los desplazamientos migratorios en primera medida se dieron en un ámbito intrarregional, gradualmente la migración de centroamericanos se orientó hacia Estados Unidos, a lo largo de dos décadas cruzaron por México más de dos millones de centroamericanos con rumbo a territorio estadounidense (González, 2013).

La frontera México-estadounidense se convirtió en una región transfronteriza emergente, ya que se ha generado una dinámica migratoria y económica en la que se generan evoluciones y convergencias, un espacio de transición entre ambas fronteras (Vanneph, 2013). De modo que

[...] las migraciones también cobran importancia en el actual contexto global subregional: se han constituido en una manifestación de la transnacionalización del istmo centroamericano, por el hecho de que la emigración a países de fuera de la región, como el desplazamiento, permanente o temporal, entre países al interior de la zona, revelan las aristas más novedosas de un proceso de transnacionalización de

la fuerza laboral como también de los mecanismos de reproducción y sobrevivencia social (Morales, p. 48).

Desde la década de los noventa hasta hoy se ha incrementado el flujo migratorio proveniente de los países centroamericanos hacia Estados Unidos, “los migrantes en tránsito aumentaron sensiblemente a partir de la década de 1990, con los acuerdos de paz en la región centroamericana y con la puesta en vigor de las políticas del Consenso de Washington” (Solís y Aguilar, 2015, p. 85).

Es por esto que en la región se han presentado flujos migratorios intrarregionales como transnacionales. Los flujos intrarregionales han tenido un mayor impacto en Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, concentrándose en cuatro fronteras: Guatemala-Belice, Guatemala-México, Nicaragua-Costa Rica y Haití-República Dominicana (Morales, 2003). No obstante, la dinámica migratoria irregular centroamericana se ha convertido en un fenómeno transnacional, teniendo como principal destino Estados Unidos (CEPAL, 2006).

El circuito migratorio transnacional propone una visión alternativa de la migración por los cambios que se generan en el movimiento de personas entre sistemas sociales y económicos distintos (Goldring, 1992), de acuerdo con las asimetrías de los niveles de desarrollo de los estados de la región (CEPAL, 2006). La situación que se presenta en los países de origen se relaciona con las diferencias demográficas y económicas entre los países del Norte y Sur; y en los países destino existen factores de atracción, como la dependencia que se ha generado por la mano de obra extranjera (Micolta, 2005).

“Las migraciones laborales transfronterizas o transnacionales son uno de los movimientos que subsumen globalmente a la población” (Morales, 2003, p. 46). Las economías desarrolladas necesitan mano de obra migrante para realizar tareas que los

trabajadores autóctonos eluden (CEPAL, 2006). Además, esta dinámica migratoria laboral se caracteriza por el interés en los salarios, puesto que los trabajadores extranjeros proceden de países de bajos ingresos que en comparación con los salarios del país receptor suelen ser mayor (Arango, 2003).

Los vínculos transnacionales se han convertido en importantes impulsores de migración. Un vínculo importante ha sido el de las familias transnacionales definidas como: “unidades sociales que trascienden fronteras, tienen conciencia de formar parte de la diáspora, hacen una reproducción cultural híbrida y mantienen la pertenencia afectiva y emocional con el origen” (Citado en Cerda, 2007, p. 80). Esto genera una vinculación económica expresada en algunas prácticas: 1. Remesas familiares; 2. Demanda de bienes de consumo; y 3. La inversión a capital (Orozco y Malloy, 2012).

Por otra parte, los cambios políticos afectan la migración internacional. Como se ha mencionado la desestabilización política que ha caracterizado a los países Centroamericanos ha influido en los flujos,

[...] en relación con la mayoría de países latinoamericanos se constata que la evolución hacia instituciones republicanas y democráticas ha sido conducida, con gran discrecionalidad, por intereses de ciertos grupos sociales o grupos de denominación que no han sometido a los fines del estado democrático y social y a las reglas del estado de derecho (Cáceres, 2010, p. 21).

Ejemplo de ello es la corrupción que interfiere en la relación de confianza entre los ciudadanos y las instituciones, lo que explica el deterioro institucional centroamericano.

También, el fenómeno delictivo transnacional del crimen organizado ha traspasado las fronteras, erosionando las diferentes esferas sociales y políticas, lo que ha generado inseguridad y violencia en los países de Centroamérica, particularmente en el Triángulo Norte.

2.2. Factores expulsos en los países pertenecientes al Triángulo Norte

2.2.1 Problemas de seguridad

Actualmente, los problemas más grandes de inseguridad que presenta Centroamérica son el tráfico de drogas, la delincuencia organizada y la violencia que se asocia a estas actividades. Las organizaciones delincuenciales se encuentran interrelacionadas en esta región, deteniendo el desarrollo tanto a corto como largo plazo, ya que las políticas públicas están encaminadas a mitigar los efectos de las actividades delictivas, dejando de lado temas como el desempleo y la pobreza.

Históricamente, Centroamérica se ha visto envuelta en guerras civiles que nunca han cesado de manera definitiva, lo que ha generado inestabilidad política en la región, así como una ola de violencia abrumadora que se refleja en los altos índices de homicidios, especialmente en los países pertenecientes al Triángulo Norte. Tal como se evidencia en la figura 1, en el periodo 2000-2011 por cada 1000 habitantes los homicidios aumentaron más del doble en países como Honduras (92 por cada 100.000 habitantes) y el Salvador (69 por cada 100.000); siendo así, una de las regiones más violentas del mundo en comparación con otros países como Belice (45 por cada 100.000 habitantes), Venezuela (49 por cada 100.00 habitantes). Las víctimas de homicidio en Centroamérica se caracterizan por ser hombres jóvenes entre los 15 y los 34 años de edad (ver figura 1).

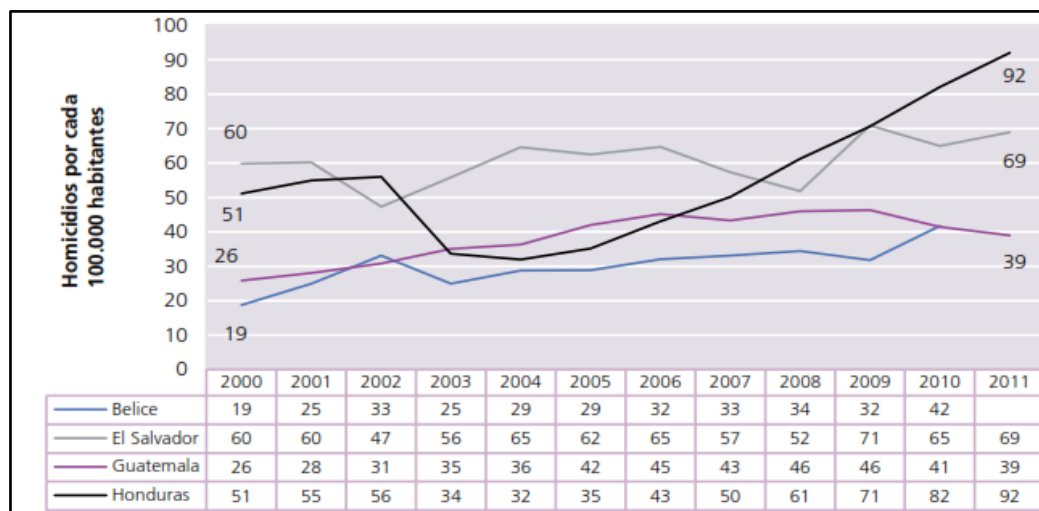


Figura 1. Tasas de homicidios en Centroamérica: Triángulo Norte 2000-2011.

Fuente: UNODC - Homicides database, 2012.

Estos casos de violencia han desencadenado un aumento en las migraciones de los países del Triángulo. Para el año 2012, 1,78 millones de inmigrantes ilegales provenían de Centroamérica. En el periodo 2008-2012 las migraciones irregulares de El Salvador aumentaron 21 % pasando de 570.000 a 690.000 habitantes. Honduras presentó un incremento del 30 %, siendo el país con mayor número de migrantes irregulares después de México en la región. Por último, Guatemala tuvo un incremento del 20 % registrando 560.000 inmigrantes irregulares en territorio estadounidense (Homeland Security, 2012).

La violencia en estos países aumenta debido al tráfico de droga, armas y personas. Tal como lo señala UNODC (2012), “Centroamérica y el Caribe se encuentran a lo largo del que ha sido durante largo tiempo el flujo de droga de mayor valor en el mundo: el flujo de cocaína desde Suramérica y los Estados Unidos” (p. 16).

Tal es el caso de Honduras, en el que el gobierno estadounidense asegura que “aproximadamente 65 de las 80 toneladas transportadas por aire hacia los Estados Unidos aterrizan en Honduras, representando el 15 % del flujo de cocaína” (UNODC, 2012). El

crecimiento del flujo de tránsito de drogas, especialmente cocaína en Centroamérica, aumentó notablemente desde el 2005, las incautaciones de cocaína pasaron de 30 y 40 toneladas a 80 toneladas en el 2011 (UNODC, 2012). Esto se debe al aumento de los controles contra el narcotráfico en los países productores de cocaína como Colombia y México. Centroamérica, especialmente los países del Triángulo, por su ubicación participa activamente en este mercado lo que a su vez produce luchas internas por las rutas y territorios fronterizos entre pandillas y organizaciones de crimen organizado (Banco Mundial, 2010).

Probablemente la relación entre droga-violencia en los países del Triángulo Norte es el resultado de “1. Las disputas entre y dentro de las organizaciones traficantes de droga, 2. La disfunción del sistema de la justicia penal debido a la corrupción relacionada con la droga, y 3. La diseminación de armas” (Banco Mundial, 2010, p. 7).

Además de los problemas de violencia e inseguridad, los países del Triángulo cuentan con la participación de diversos actores como carteles de drogas (Cartel de Sinaloa, Zetas), maras y pandillas locales, lo cual genera problemas de corrupción en el sistema judicial e instituciones. “Frente a esta situación, ni las políticas nacionales ni las estrategias o iniciativas internacionales han contribuido a mejorar la situación de seguridad ni el bienestar de la población de los países del Triángulo Norte” (Quasten, 2013, p. 2).

Como consecuencia, los países del Triángulo comparten problemas estructurales como la impunidad, cerca de 90 % de los crímenes no pueden ser esclarecidos, lo que intensifica la violencia e inconformidad frente a las autoridades judiciales (Quasten, 2013). Además, la disfuncionalidad de las instituciones ha generado que se amplíe el mercado de tráfico del crimen organizado, no solo trafican drogas sino también armas. En 2010 se

incautaron cerca de 16.000 armas de fuego en Centroamérica. En El Salvador y Guatemala se incautaron cerca de 4800 armas en 2010, siendo los países que representan un mayor índice en comparación con otros de la región como Costa Rica (2500 armas), Panamá (2000 armas) y Honduras (1500 armas) (UNODC, 2012).

La situación descrita se relaciona con el aumento de las migraciones y la intensión de migrar por parte de los ciudadanos del Triángulo. Con base en el análisis de datos de la encuesta del Barómetro de las Américas desde 2004 hasta 2012, se intenta aclarar la relación entre violencia y migración en la región. En este estudio se utilizó un modelo econométrico multivariado utilizando variables socioeconómicas y demográficas de los migrantes, así como también variables diseñadas para captar posibles efectos que el crimen puede tener sobre la migración.

En la comprensión del impacto de la violencia en la migración resulta importante analizar si ser víctima de un delito o simplemente sentirse inseguro es una causante de migración. Según los resultados representados en la figura 2 “es evidente el impacto significativo que tiene ser víctima de la delincuencia y la corrupción sobre la probabilidad de que un individuo planea migrar en el futuro cercano” (LAPOP, 2014, p. 6). En relación con las cifras de homicidio descritas se identifica la relación en el aumento de las migraciones de los países del triángulo y el contexto de violencia presente.

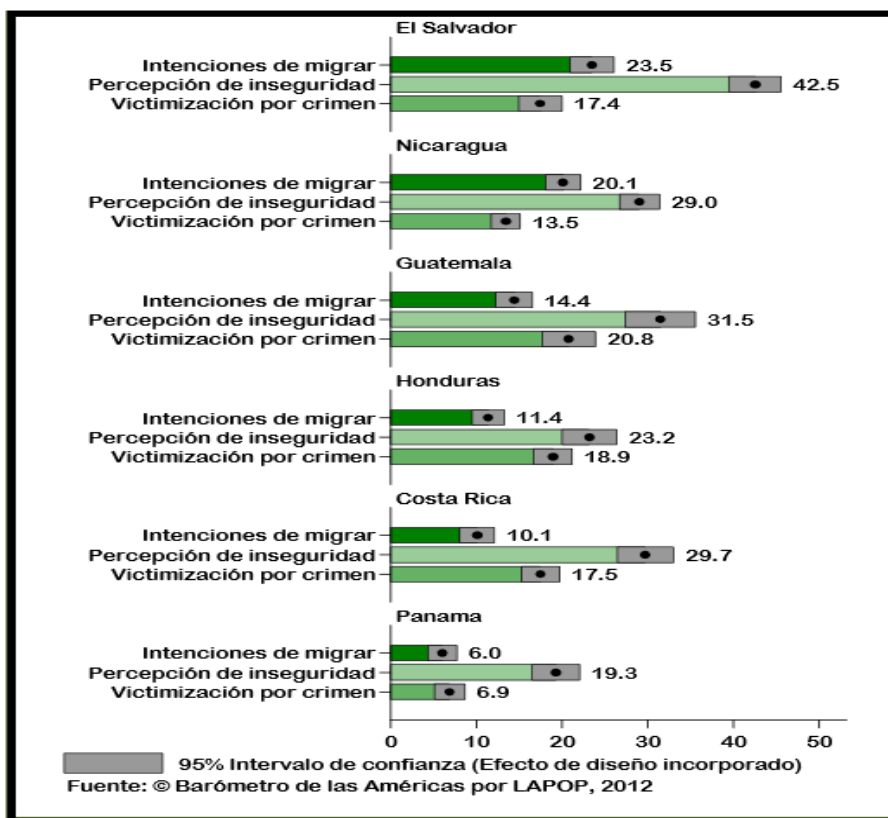


Figura 2. Intenciones de migrar, percepción de inseguridad y victimización por crimen en Centroamérica, 2012.

Fuente: Barómetro de las Américas, 2012.

Se concluye que la delincuencia e inseguridad están significativamente relacionadas con la intención de migrar en países como El Salvador, Nicaragua y Guatemala. Mientras que en países como Honduras y Costa Rica, que representaban altos niveles de victimización por crimen, tienen una baja relación con la intención de migrar de solo el 10 %. Se encontró que la victimización y el miedo al delito están significativamente relacionados con las intenciones de emigrar, aunque la experiencia más directa con la delincuencia es más importante.

2.2.2 Crimen internacional organizado (CO)

Los desplazamientos han aumentado debido a los incrementos de la violencia a causa del crimen organizado en la región del Triángulo Norte. Se han presentado tres tendencias claves que han influenciado en el desarrollo de las actividades ilícitas organizadas. En primer lugar, la creciente profesionalización de las actividades criminales, en segundo lugar, la relación crimen organizado-sistema político. En tercer lugar, el uso de la fuerza de manera ilícita (laRED, 2011). Esto, dificulta la rearticulación de las instituciones y redes de poder que enfrenten eficazmente las organizaciones delincuenciales. El crimen organizado debilita la estructura del Estado, provocando una ineficiencia institucional que justifica las dificultades en la protección de sus ciudadanos.

Después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 se cataloga

[...] al crimen organizado como una amenaza de primer orden, entre otras razones debido a que crecen sus vínculos con organizaciones terroristas —principalmente en países del medio oriente y el sur de Asia— y porque se vieron favorecidas las actividades transnacionales por el proceso de globalización y apertura de las fronteras en la última década del siglo (Benítez, 2011, p. 2).

El actuar del crimen organizado se da a través de extorsiones, amenazas, violaciones, asesinatos, reclutamiento forzado, etc., con el propósito de controlar territorio estratégico para los negocios ilícitos. Por parte de los gobiernos centroamericanos ha resultado ineficiente ante las magnitudes de necesidad de protección, dado que “ningún país de la región centroamericana cuenta con legislación específica sobre el desplazamiento forzado interno frente a estas nuevas formas de violencia generadas por el crimen organizado” (ACNUR, 2012, p. 14).

Dentro de la red del crimen organizado las zonas fronterizas y áreas marginales de los centros urbanos son las principales zonas de riesgo, ya no es solo un espacio urbano-rural, es una situación regional generadora de desplazamiento forzado. Entre los factores claves de las zonas de riesgo y las zonas expulsoras (generadoras de desplazamiento forzado) ante el crimen organizado se tienen los siguientes:

Tabla 1

Factores clave de las zonas de riesgo y las zonas expulsoras ante el CO

Zonas de riesgo: fronterizas y áreas marginales	Zonas expulsoras: generadoras de desplazamiento forzado
Control migratorio en pasos autorizados.	Violencia.
Tráfico ilícito de migrantes (transportistas, cambistas de bienes, coyotes).	Abandono de comunidades por parte de personas locales y repoblamiento de las misma por personas reclutadas, familiares y agentes del CO.
Trata de personas.	
Debilitamiento de instituciones estatales ante el crimen organizado.	Narcotráfico.
Reclutamiento forzoso de niños y niñas.	Reclutamiento forzado de jóvenes, niños, por el CO.
Extorsiones, robos, asesinatos, amenazas, secuestros, violaciones por el CO.	Debilitamiento de instituciones estatales ante el CO.

Fuete: Elaboración de la autora con base en CIDEHUM 2011.

Por ejemplo, en Guatemala el patrón de desplazamiento forzado se identifica de la siguiente manera: primero, se origina desplazamiento en zonas controladas por el CO en “narcoterritorios”, segundo, desplazamiento de testigos o personas que hayan denunciado a organizaciones criminales, obligando a la población a desplazarse forzosamente dentro y fuera del país para huir de esta problemática (ACNUR, 2012). En los casos de Honduras y El Salvador el patrón de desplazamiento no dista mucho del señalado en Guatemala, no

obstante, el actuar del CO se caracteriza por las represalias que se dan en caso de acceder con el pago de cuotas o extorciones, “así se aumenta el desplazamiento forzado de las personas hacia el exterior, que en repetidas ocasiones se da en condiciones de tanta urgencia que se decide migrar de cualquier forma” (ACNUR, 2012). Esta situación genera que los migrantes transiten por las fronteras de manera irregular en condiciones vulnerables que afectan sus derechos humanos. Por otra parte, según ACNUR (2012) existe una correlación entre la violencia de los países del Triángulo Norte y las solicitudes de asilo y el estatus de refugiado que solicita la población del Triángulo en Estados Unidos, que representa un 130 % de solicitudes entre el periodo 2009-2013, y un 31 % entre 2010-2012 respectivamente. El Salvador es el país de la región que cuenta con un mayor número de refugiados (8734) en comparación con Guatemala (6796) y Honduras (3047) (ver figura 3).

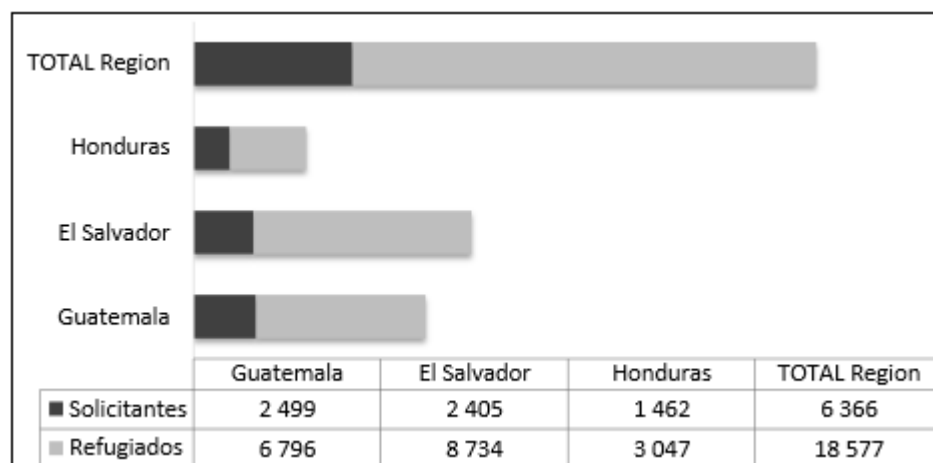


Figura 3. Refugiados y solicitantes de refugio del Triángulo Norte en Estados Unidos, 2013.

Fuente: Informe preliminar ACNUR JIPS-ACAPS 2014.

En Centroamérica el crimen organizado se caracteriza por estar formado por pandillas y maras, las más reconocidas a nivel mundial es la Mara Salvatrucha (MS13) y la Calle 18 (ACNUR, 2012) el número estimado en Centroamérica está entre 10.000 y 30.000 encontrándose principalmente en Honduras con 36.000 (tabla 2), lo que refleja la situación actual de este país. Los actos delictivos y la violencia hacia los actores locales se le atribuyen a las maras como principales responsables en un 60 % de los casos.

Tabla 2

Número de maras por país del Triángulo Norte

País	Número de miembros de maras	Número de maras
Honduras	36.000	112
Guatemala	14.000	434
El Salvador	10.500	4

Fuente: elaboración de la autora con base en datos publicados en documento de ACNUR, 2012.

Las maras han sido un foco generador de violencia en Centroamérica. En Guatemala durante el periodo 2000-2003 se encontró que las maras causaron aproximadamente el 27,4 % de muertes a jóvenes de veinticinco años y menores. En El Salvador entre 2003 y 2006 se le atribuyeron a estos grupos más del 13,4 % del total de los homicidios. En

Honduras se les atribuye la responsabilidad del 15 % de los asesinatos en el país en 2006 (Banco Mundial, 2010).

Estas maras y pandillas reclutan niños y jóvenes desde edades de siete a dieciséis años por lo que, las migraciones irregulares por motivos de violencia, especialmente por amenazas impartidas por las pandillas o maras, han incrementado el número de menores no acompañados en el tránsito irregular. Según ACAPS (2014) en la frontera con Estados Unidos en 2011 hubo 4059 menores detenidos y 21.537 en 2013.

La violencia juvenil presenta una correlación con los bajos niveles educativos que se presentan en la región. Por ejemplo, la tasa de analfabetismo en 2010 fue del 19 % para Honduras, 17 % para El Salvador y el 26 % en Guatemala (Banco Mundial, 2010). Los índices de desescolarización, como jóvenes que no asisten a la escuela secundaria presentan variaciones significativas siempre al alza, es decir, aunque se implementan políticas por parte del Estado para ampliar la cobertura en educación las cifras muestran lo contrario, según el Banco Mundial (2010), en el periodo entre 1998 y 2004, 71,8 % de los jóvenes en Guatemala no asisten a la escuela secundaria, en Honduras la cifra es de 52 % y al Salvador corresponde el 55,3 %. La existencia de pandillas transnacionales y las organizaciones internacionales de crimen organizado tienen una dependencia mutua, ya que los narcotraficantes que operan en Centroamérica aprovechan la red delincencial de las pandillas, y estas a su vez ofrecen sus servicios en territorios específicos que les generan más ventajas. Por tanto, estas esferas delincuenciales se han convertido en un problema de seguridad nacional para estos países centroamericanos.

Por otra parte, la deportación es un factor que contribuye al problema de las maras. Desde el 2005, la policía estadounidense enfocó sus esfuerzos a través de un programa

llamado *Operation Community Shield* para aprehender a los miembros de las maras que residían en Estados Unidos. Fueron condenados penalmente 4000 miembros y 7000 fueron deportados. Esta situación desencadena conexiones transnacionales entre los miembros de maras de Estados Unidos y Centroamérica, ya que de las 200.000 personas deportadas hacia Centroamérica desde el 2004 unos cuantos miles eran miembros de los maras (Banco Mundial, 2010, p. 8b).

2.3 Problemas económicos

Son varios aspectos que se pueden identificar como principales focos de migración a causa de la situación económica de los países del Triángulo Norte. La economía del Triángulo Norte ha experimentado un retroceso en sus economías debido a la crisis financiera de 2009. Los países del Istmo Centroamericano se vieron afectados principalmente por la recesión de Estados Unidos, principal socio comercial. Esta región comenzó a verse afectado desde el 2007 cuando los precios internacionales de granos básicos y petróleo se incrementaron, lo que significó un alza en la inflación de los países Centroamericanos (CEPAL, 2009). En Centroamérica se concentra el mayor número de población pobre de América Latina. El porcentaje de población en situación de pobreza asciende al 33,1 % en América Latina, mientras que en Centroamérica este es aproximadamente de 50,9 % (FAO, 2011). El mayor porcentaje de población en situación de pobreza se encuentra en los países del Triángulo Norte y Nicaragua. Además la población que vive en pobreza extrema representa el doble de la latinoamericana (figura 4).

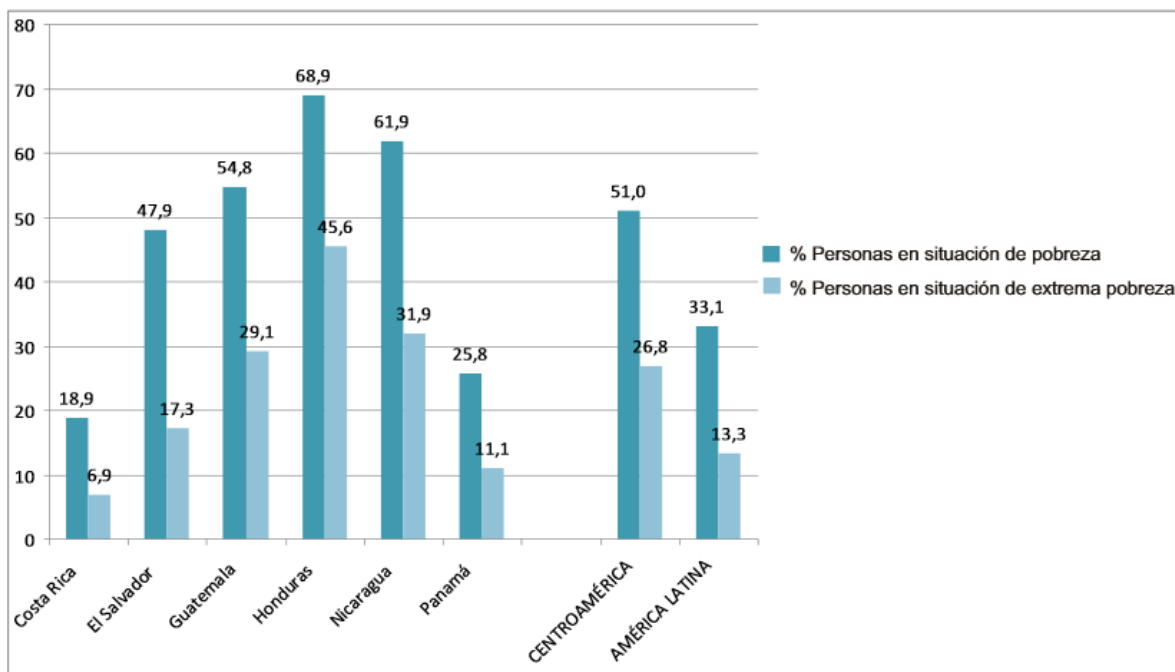


Figura 4. Centroamérica, porcentaje de personas en situación de pobreza y extrema pobreza.

Fuente: FAO, 2011. Con base en CEPAL. Los años de referencia son: para pobreza, 2009; extrema pobreza, 2009 (Costa Rica, El Salvador y Panamá), 2007 (Honduras y Nicaragua) y 2006 (Guatemala).

Honduras representa el mayor porcentaje en situación de pobreza con 68,9 %, seguido por Nicaragua (61,9 %), Guatemala 54,8 % y El Salvador 47,9 %, en contraposición se encuentra Costa Rica (18,9 %) y Panamá (25,8 %). La pobreza es una causa que limita el desarrollo y obstruye a las sociedades en la integración de la dinámica económica mundial, es por esto que en el ámbito centroamericano “surgen dinámicas vinculadas con la transnacionalización de los fenómenos sociales y la formación de nuevos espacios de manifestación de la pobreza” (Morales, 2003, p. 3). Determinantes como la desigualdad y la violencia ya no hacen parte de un ambiente netamente local, estos cada vez se vuelven más globales expresándose en el aumento migratorio de la región. Los flujos migratorios

del Triángulo se han caracterizado por tener como principal destino Estados Unidos, sin embargo no puede afirmarse que las migraciones solo se deban a la situación de pobreza de la región, es un factor, pero no es el determinante.

Otro foco de migración es la falta de oportunidades de empleo que tienen los jóvenes. Centroamérica y República Dominicana tienen una población en edad de trabajar de 36 millones de personas. Para el año 2011 la mayor tasa de desempleo se registraba en Costa Rica (8,0 %), seguido por Nicaragua (6,6 %). Los países del Triángulo representaban una tasa no mayor del 5 %, Honduras (4,0 %), El Salvador (4,1 %) y Guatemala (4,1 %). Panamá es el país con la tasa más baja de desempleo (3,0 %) (OIT, 2014).

Es importante señalar que la población joven tiene grandes dificultades para acceder al mercado laboral, lo que indica que en Centroamérica no se están generando los suficientes puestos de trabajo que puedan absorber la mano de obra, o la demanda laboral ha disminuido hacia esta población por la falta de experiencia o la baja educación que presenta esta población. El promedio regional de desempleo en la población de 15 a 24 años fue de 9,5 % en 2011 (OIT, 2014).

En El Salvador y Honduras aumentó la tasa de desocupación de esa población para el 2010 representadas en 8,9 % y 8,7 % respectivamente. En comparación con Guatemala que tiene una tasa de desocupación 7,4 % (ver tabla 3). A esto se suma la violencia que caracteriza a los países del triángulo, por esto, muchas veces los jóvenes se ven obligados a participar en las pandillas y maras como medio de subsistencia.

Tabla 3

Centroamérica y Triángulo Norte: Población desocupada de 15 a 24 años, 2011

Edad	Costa Rica	El Salvador	Guatemala	Honduras	Nicaragua	Panamá	República Dominicana	Promedio Regional
15 a 19 años	23,9	7,1	7,7	5,3	8,4	7,3	12,8	8,8
20 a 24 años	13,6	8,9	7,4	8,7	10,0	8,6	11,8	9,5
Total	16,6	8,2	7,5	7,1	9,2	8,2	12,1	9,2

Fuente: Elaboración de la autora con base en OIT, 2014.

Existe un círculo vicioso⁶ que comienza por la falta de oportunidades de empleo, incrementando la emigración ilegal, y se crea un intercambio de remesas hacia el país de origen. Esta situación se ha presentado en Centroamérica, especialmente en los países del Triángulo Norte. Por lo que “la región permanece dependiente de las remesas, y la pérdida de capital humano nacional seguramente socava el progreso” (UNODC, 2012, p. 73).

Las remesas ayudan a mejorar la situación de pobreza de las personas que las reciben, sin embargo las remesas reemplazan ingresos que se podrían obtener al interior del país y las personas en muchos casos deciden no participar en el mercado laboral, además aumenta el consumo de los hogares y en pocos casos ahorran un valor significativo. En la figura 5 se observa cómo ha aumentado el flujo de remesas a medida que aumenta la migración a Estados Unidos.

No obstante, de acuerdo con los datos anteriores se observa que frente al aumento de las remesas estas no han influido en una disminución significativa de la pobreza en los

⁶ Término utilizado en el Informe de Desarrollo Humano El Salvador, 2005.

países Triángulo, ya que según el Banco Mundial (2008) “un aumento de las remesas en un 1 % del PIB reduce la ratio de pobreza en 0,3 puntos porcentuales”. El Salvador recibe aproximadamente \$2200 millones anuales en remesas, Guatemala recibe \$1800 millones y Honduras recibe \$800 millones en remesas de Estados Unidos (figura 5).

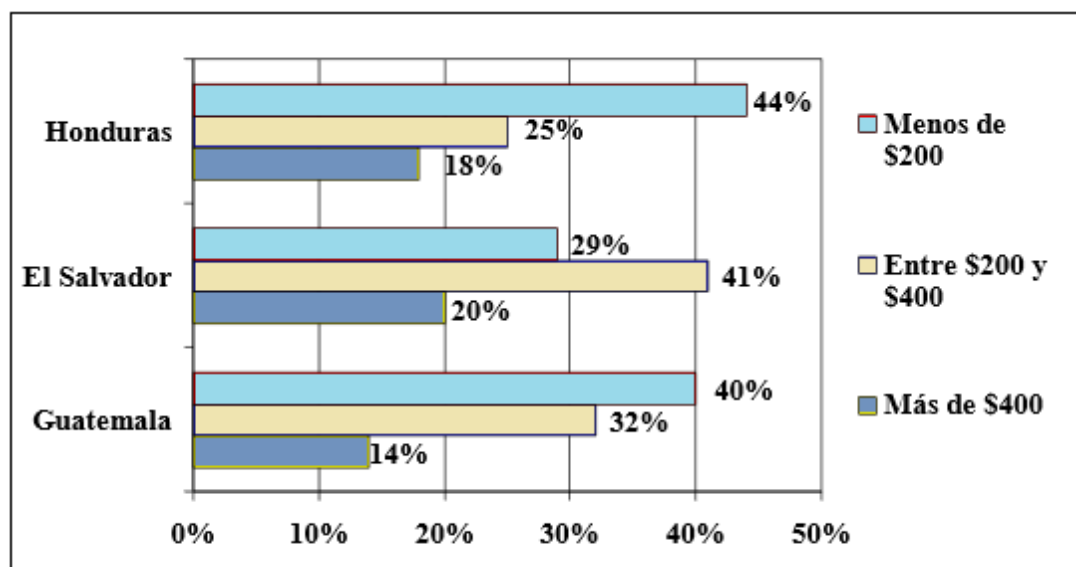


Figura 5. Remesas, Centroamérica-Estados Unidos, 2003.

Fuente: Pew Hispanic Center-FOMIN, 2003.

Por otra parte, la actividad criminal y la violencia produjeron incrementos importantes en costos sociales y económicos (figura 6). Por ejemplo, la actividad criminal aumenta el costo de hacer negocios en la región, ya que las maras y las pandillas como los Zetas y MS13 obligan a las firmas a contratar sistemas de seguridad privada, así como a cumplir con las cuotas de extorsiones y vacunas correspondientes.

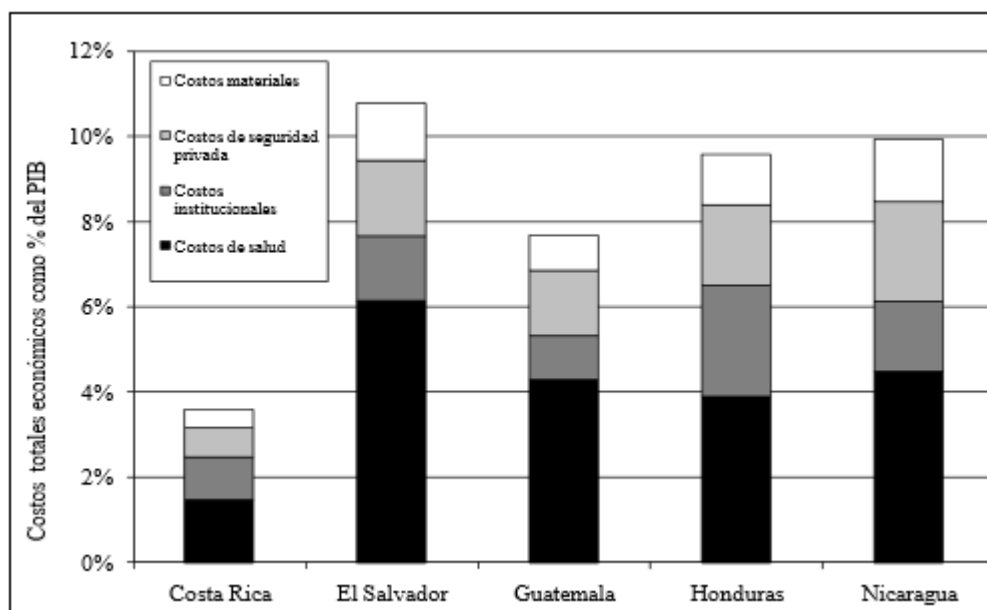


Figura 6. Costos económicos totales por crimen y violencia como porcentaje del PIB.

Fuente: Banco Mundial, 2010.

Se observa que el mayor costo en todos los países fue el de salud. En el Salvador, Honduras y Nicaragua los costos superaron el 9 % del PIB, siendo los más altos en la región. En Guatemala los costos totales fueron del 7,7 % del PIB y los costos más bajos los representó Costa Rica (3,6 % del PIB). Un contexto inseguro y violento afecta la economía: “frenando las inversiones, aumentando el ausentismo laboral, reduciendo la productividad debido a los perjuicios provocados a los trabajadores, y desviando los recursos hacia la prevención de la violencia y la seguridad” (Banco Mundial, 2010). En el siguiente capítulo se analizarán las políticas migratorias y sus efectos en los países del Triángulo Norte, con el objetivo de identificar los resultados de estas políticas, que tienen como objetivo la

reducción de la migración irregular en territorio estadounidense, usando la estrategia de seguridad nacional promulgada desde los atentados del 11 de septiembre por el expresidente George W. Bush y precedida por el gobierno de Barack Obama.

Capítulo 3. Panorama migratorio en Estados Unidos: políticas y efectos

En el capítulo anterior se evidenciaron los factores expulsores de los países del Triángulo Norte, en los que la violencia es el factor predominante, puesto que es el generador de otros factores y, a su vez, es el que aumenta considerablemente los flujos migratorios en estos países.

Ahora bien, en este capítulo se pretende analizar las políticas del gobierno norteamericano frente al fenómeno migratorio proveniente de los países del Triángulo Norte, identificando su progreso y resultados en su aplicación, también se revisará cómo se han formulado las reformas migratorias de los Estados Unidos y los discursos políticos en los gobiernos de George W. Bush y Barack Obama, así como el accionar de las relaciones bilaterales con los países del Triángulo Norte con el fin de observar si en realidad estas políticas han logrado su objetivo, que es la disminución de los migrantes irregulares, o si por el contrario, las dinámicas migratorias aumentan. Además de identificar las contradicciones entre los objetivos de las políticas y la instrumentalización de estas.

3.1 Políticas migratorias en torno al concepto de seguridad

Desde la década de los noventa hasta la actualidad se ha incrementado el flujo migratorio proveniente de los países centroamericanos hacia Estados Unidos. Según U.S. Census Bureau la población inmigrante centroamericana en los Estados Unidos ha crecido rápidamente en las recientes décadas, en 1980 era de 345.655; para 1990 se triplicó a 1,1 millones. En 1990, la mayor población migrante centroamericana en territorio

estadounidense provenía de El Salvador (42,1 %), Guatemala (20,4 %) y Nicaragua (15,2 %), en comparación con otros países de la región con tasas menores como Costa Rica (2,0 %), Belice (2,7 %) y Panamá (7,7 %) (MPI, 2011).

Es por esto que la política migratoria estadounidense planteó contrarrestar las migraciones irregulares en el límite con México y Estados Unidos adoptando políticas que aumentaran la presencia militar.

Existe un vínculo histórico entre migración y seguridad, sobre todo en la frontera con México, donde prácticamente se ha convertido como puerto de llegada y salida para centroamericanos, suramericanos y cientos de personas que llegan a ciudades fronterizas como Veracruz, Tapachula, Tijuana, Chiapas y Oaxaca; donde luego parten con rumbo a diversas ciudades de Estados Unidos” (Alveranga et al., p. 65).

La importancia de mantener el control en estas zonas generó una serie de políticas que tenían como objetivo disminuir la migración irregular en la frontera sur. De acuerdo con Andreas, citado por Moreno (2013), se promovió la Operación Guardián (*Gatekeeper*) en el sur de San Diego, California en 1994, que fue establecida en tres etapas. La Operación Guardián contaba con un equipo militar especializado para supervisar la frontera las veinticuatro horas, además de la creación de un cerco con luces de extrema potencia alrededor de la línea de Tijuana-San Diego.

En 1996 se proclamaron nuevas bases sobre la gestión de migraciones irregulares con la aprobación de la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del Inmigrante (IIRAIRA), estimando cerca de 600 deportaciones diarias. Con esta ley, se estipularon nuevos mecanismos que permitieron intensificar los controles migratorios: cambios hechos a las formas de deportación y de quiénes podrían deportarse, la implementación de penas civiles y la autorización de toma huellas a los migrantes capturados (Castañeda, 2012).

Según Warren (1994) cerca de cinco millones de inmigrantes indocumentados residían en Estados Unidos para octubre de 1996, siendo California el estado con mayor número de inmigrantes indocumentados que representaban el 40 % de la población total, lo siguen los estados de Texas con 14 %, Arizona con 7 % y, por último, el estado de Florida con 2,3 % indocumentados. La población estimada como inmigrante ilegal provino principalmente de México (54 %), El Salvador (6,7 %), Guatemala (3,3 %) y Honduras (1,8 %) (Warren, 1994, p.7).

Estos aumentos en los controles migratorios implicaron problemas a los inmigrantes, obligándolos a buscar nuevas rutas de paso en la frontera mexicana, además, de acuerdo con los nuevos mecanismos de control migratorio, la investigación policial implica que al ser retenido como migrante irregular se está en la posibilidad de que sean reseñados antecedentes policiacos que en últimas limitarán de manera definitiva la posibilidad de obtener un permiso de residencia o incluso la nacionalidad.

En 1997 se generó una ley para otorgar asilo a centroamericanos de Guatemala, el Salvador, Nicaragua y ciertos países del antiguo bloque soviético, con la condición que por los menos durante cinco años a partir del 1 de enero de 1995 hayan vivido en Estados Unidos, y se vean enfrentados a la deportación, algunos de estos individuos podrían ser categorizados para ser residentes permanentes, sin embargo, dichos beneficios estaban restringidos a personas que tuviesen antecedentes por deportaciones o legales, esta ley se llamó *Nicaraguan and Central American Relief Act* (NACARA).

Estados Unidos proporciona una protección humanitaria temporal para aquellas personas que están huyendo de situaciones peligrosas o problemáticas en sus países de origen. Este programa se llama Estatus de Protección Temporal (TPS). El TPS fue

extendido para algunos inmigrantes salvadoreños a partir de la guerra civil en 1990, también para migrantes hondureños y nicaragüenses a causa de Huracán Mitch en 1998 (MPI, 2011). La población centroamericana beneficiada con este programa proviene de El Salvador (229.000), Haití (200.000), Honduras (70.000) y Nicaragua (3500) (CRS, 2010).

Con la implementación de las anteriores políticas se incrementaron las deportaciones y los controles fronterizos por parte de las autoridades estadounidenses. En 1999 las deportaciones de los países del Triángulo Norte fueron de 38.487, en comparación con los 30.456 indocumentados en 1998. Se evidencia un crecimiento de inmigrantes hondureños en 1999 debido a los desastres naturales que ocurrieron en la región, pasaron de ser 10.661 deportaciones en 1998, a 18.805 en 1999.

3.1.1 Políticas antiterroristas de Estados Unidos

Luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001, la política migratoria de Estados Unidos se planteó desde la perspectiva de la seguridad nacional y fronteriza, desde la que Estados Unidos ejerció una fuerte presión política y económica a sus países vecinos Canadá y México, con el fin de preservar la seguridad en sus fronteras, ya que “es en el contexto de la guerra antiterrorista en el que se definen nuevas políticas represivas dirigidas en contra de los inmigrantes” (Massey, Pren y Durand., 2009, p. 105).

El 11 de septiembre ha sustanciado la securización de los movimientos migratorios, al mismo tiempo que ha reforzado la lógica que atribuye a los inmigrantes y asilados un papel de potenciales amenazas a la seguridad del Estado y la sociedad (Alba y Leitte, 2004, p. 11).

De esta forma el gobierno estadounidense aumentó los poderes a las autoridades fronterizas para expulsar de manera inmediata a cualquier inmigrante legal o ilegal que estuviera reseñado en sus antecedentes penales, al mismo tiempo que destinó numerosos

recursos económicos para mejorar la vigilancia y los mecanismos de control en la frontera sur.

El 24 de octubre de 2001 fue sancionada la Ley Patriota que aplica el control social institucionalizado, es decir, el Estado tiene plena autorización para pasar por alto los derechos de privacidad de los ciudadanos interviniendo correos, llamadas, registros financieros, etc., en pro de la seguridad del país, abriendo las puertas a la vigilancia total de los individuos por parte del gobierno federal. En la Ley Patriota se crea el Departamento encargado de la Seguridad Nacional de los Estados, *Department of Homeland Security* (DHS), con el objetivo de manejar los asuntos de seguridad dentro y fuera de las fronteras y el Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) (Alvarenga, Arias y Díaz, 2013).

Para tener más control y estructurar de manera ordenada el proceso de migración, tal como lo menciona Videgaray (citado por Alvarenga, Arias y Díaz, 2013)

[...] en el 2002 entró en vigor el Acta sobre la Ampliación de la seguridad Fronteriza y Reforma de las Visas de Entrada (*EBSUERA* en inglés), cuyas disposiciones fueron complementadas en 2004 con el acta de reforma de la inteligencia. Ambas determinaron cambios en los regímenes de otorgamientos de visas, admisiones y deportaciones, y unificaron las bases de datos de agencias de seguridad pública, INS, Departamento de Estado y puertos de entrada (Alvarenga, Arias y Díaz, 2013, p. 72).

La estrategia que desarrolla Estados Unidos contra el terrorismo, puede dividirse en dos partes: la acción militar preventiva y la seguridad del territorio.

La segunda parte se aborda desde una perspectiva de círculos concéntricos de seguridad. El primer círculo es el territorio propiamente estadounidense, por lo que las fronteras del país definen los límites físicos de ese círculo. El siguiente círculo lo conforma la región Norteamericana (México, Estados Unidos y Canadá) (Hernández, 2008, p. 201).

Las acciones estadounidenses para promover la seguridad en los círculos concéntricos, en primer lugar, se basan en las políticas antiinmigrantes y, en segundo lugar, en promover la construcción de un perímetro de seguridad de América del Norte, lo que ha

llevado al Gobierno estadounidense a ejercer mayor presión a sus países vecinos, México y Canadá. Por lo que el Gobierno de Estados Unidos estableció con México el Plan de Acción de la Alianza para la frontera con el fin de desarrollar la “frontera inteligente”, con el compromiso de aplicar tecnología de punta para el control fronterizo basado en proporcionar el flujo seguro de personas, bienes e infraestructura, incrementando la vigilancia en la frontera con aviones de control remoto utilizados militarmente en el medio oriente, sensores terrestres, cámaras de visión infrarroja y mayor presencia de la guardia nacional (Hernández, 2008).

Así, el Gobierno de Estados Unidos sostuvo de manera reiterada frente al Gobierno mexicano la concepción de que la construcción de un muro en la frontera no era un acto de agresión sino de seguridad, por lo que

[...] en marzo de 2006, el Congreso y Senado estadounidense promovieron una Reforma Migratoria que aprobó la construcción de un muro fronterizo con México, el patrullaje de la Guardia Nacional en la frontera y el incremento de recursos para el ICE, así como un nuevo mecanismo para la verificación de los solicitantes de trabajo conocido como E-Verify (Alvarenga, Arias y Díaz, 2013, p. 55).

Según el Departamento de la Seguridad Nacional (DHS), se emplearon nueve programas para alcanzar el objetivo propuesto del control eficaz de las fronteras, bajo la misión de reducir el riesgo de potenciales terroristas y actividades legales que quieran entrar a Estados Unidos a través de las fronteras nacionales (ver tabla 4).

Tabla 4

Programas objetivo: Department of Homeland Security

Programas objetivo	Descripción	Presupuesto en millones
Migrant Interdiction (U.S. Coast Guard)	Eliminar el flujo de indocumentados a través de las rutas marítimas hacia	\$558,5

	los Estados Unidos.	
Border Security and Control between Ports of Entry (CBP)	Control efectivo de la frontera de Estados Unidos en áreas consideradas de alta prioridad para la amenaza terrorista potencial u otros objetivos de seguridad nacional.	\$4025,6
Border Security Fencing, Infrastructure, and Technology (CBP)	Mantener el control efectivo de las fronteras terrestres de Estados Unidos mediante la implementación de tecnología e infraestructura táctica.	\$1225
Other Law Enforcement (U.S. Coast Guard)	Reducir el número de incursiones de buques ilegales en la zona económica exclusiva de Estados Unidos.	\$161,3
Border and Maritime Security (S&T)	Mejorar el personal del Departamento de Seguridad Nacional para asegurar las fronteras aéreas, terrestres y marítimas a través de la ciencia y tecnología.	\$33,4
Defense Readiness (U.S. Coast Guard)	Mejorar la seguridad nacional y estrategias militares, garantizando que los activos están en el nivel de preparación requerido.	\$657,7
Waterways Management: Ice Operations (U.S. Coast Guard)	Limitar la perturbación del comercio marítimo.	\$106,9
Ports, Waterways and Coastal Security (U. S. Coast Guard)	Gestionar los riesgos relacionados con el terrorismo en el ámbito marítimo estadounidense.	\$218,7
Air and Marine (CBP)	Denegar el uso de aire, tierra y aguas costeras para la realización de actos terroristas y otras actividades ilegales contra Estados Unidos.	\$796,8

Fuente: elaboración propia, con base en DHS Annual performance report, fiscal years 2008-2010.

De los anteriores programas, aquellos que no cumplieron 100 % su objetivo, estando por debajo del 50 % de aceptación fueron *Migrant Interdiction*, *Border Security Fencing*,

Infrastructure, and Technology y Defense Readiness. Las razones del por qué estos objetivos no se cumplieron a cabalidad fueron, por una parte, que la Unidad de Seguridad Portuaria se mantuvo por debajo de los estándares, en particular su disposición con respecto a la falta de cualificación y formación de seleccionados. Por otra parte, el uso de contrabandistas marítimos por parte de migrantes irregulares provenientes de Cuba representó el 75 % del flujo a través del estrecho de Florida.

La tasa de interceptación de inmigrantes cubanos cayó a un mínimo de 38,6 % en el año fiscal 2008, por lo que la guardia costera estadounidense está tratando de contrarrestar esta amenaza con el aumento de vigilancia. Por último, en el año fiscal 2008, se construyeron 501,6 millas de la infraestructura táctica en la frontera con México, haciendo mención la “frontera inteligente”, sin embargo, la construcción de la valla ha presentado dificultades por la adquisición de terrenos y parcelas.

Los esfuerzos del Gobierno estadounidense por detener el flujo de inmigrantes irregulares ha generado que la población civil norteamericana vea la migración como una amenaza para su territorio (Massey, 2012), puesto que “las ordenanzas locales y todo el corpus legislativo estatal producido en Estados Unidos en las últimas décadas, yace la noción de que la riqueza, la cultura, la identidad y, últimamente la seguridad nacional están siendo amenazadas por la migración” (Castañeda, 2012, p. 301).

Los indicadores de aplicación de la ley migratoria muestran el aumento de las deportaciones, el incremento en el presupuesto de la patrulla fronteriza, el INS (*Immigration and Naturalization Service*) y el número de horas de vigilancia fronteriza entre 1965 y 2008 (Massey, 2009). Entre el periodo 1965 y 1985 (ver figura 7) como los indicadores se mantienen prácticamente constantes, estos empiezan a mostrar un leve

aumento en 1994 con la expedición de las operaciones Guardián y El Paso. Los indicadores muestran un incremento radical en 2002, con la implementación de la Ley Patriota. Para el año 2008, el presupuesto de la patrulla fronteriza creció con un factor de 52, el número de horas de vigilancia fronteriza pasó de cero a un factor de 74 y las deportaciones con un factor de 32 (Massey, 2009).

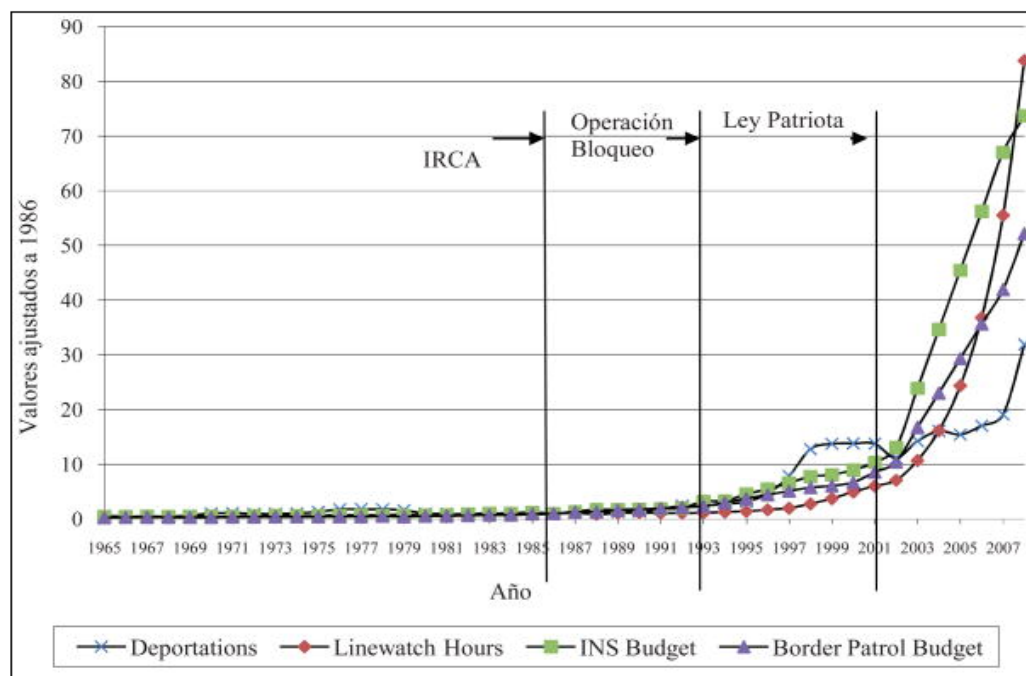


Figura 7. Indicadores de aplicación de la Ley migratoria 1965-2008.

Fuente: Massey, Pren y Duran (2009).

Las deportaciones tuvieron un aumento importante debido al aumento de controles fronterizos, entre 2005 y 2010 los devueltos por Estados Unidos hacia los países del Triángulo aumentaron en 89 % (Rodríguez, Berumen y Ramos, 2011). El mayor número de devueltos por Estados Unidos son los salvadoreños con 166 % seguido de guatemaltecos con 153 % en este periodo de tiempo (ver tabla 5). Se observa que los retenidos en la frontera Mexicana a partir del 2007 presentaron una tendencia a la baja pasando de 71.788 retenciones en 2006 a 47.547 en 2007. Esta disminución se debe a la creciente inseguridad

en la zona norte de México y a la mayor vulnerabilidad a que se ven expuestos los migrantes por parte del crimen organizado; además por el aumento de las estaciones migratorias en la frontera, en las que los nacionales de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, constituyen entre 92 y 95 % de los alojados (INM, 2011).

Tabla 4

Comparativo de migrantes centroamericanos retenidos en la frontera con México y migrantes centroamericanos devueltos por Estados Unidos, 2005-2010

Nacionalidad	Año						Variación 2005-2010
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
Retenidos por Estados Unidos en la frontera con México	123,086	71,788	47,547	47,016	37,409	40,932	- 67 %
Guatemala	25,280	16,524	15,058	15,798	13,995	17,112	- 32 %
Honduras	51,806	23,498	20,055	19,004	12,257	11,391	- 78 %
El Salvador	46,000	31,766	12,434	12,214	11,157	12,429	- 73 %
Devueltos por Estados Unidos	37,570	57,343	72,521	78,272	71,532	70,884	89 %
Guatemala	11,512	18,305	23,062	28,051	27,222	29,095	153 %
Honduras	18,941	24,643	29,348	30,018	25,101	22,878	21 %
El Salvador	7,117	14,395	20,111	20,203	19,209	18,911	166 %
Diferencia de devueltos - retenidos	- 85,516	- 14,445	24,974	31,256	34,123	29,952	n.a.
Guatemala	- 13,768	1,781	8,004	12,253	13,227	11,983	n.a.
Honduras	- 32,865	1,145	9,293	11,014	12,844	11,487	n.a.
El Salvador	- 38,883	- 17,371	7,677	7,989	8,052	6,482	n.a.

n.a. - No aplica.

Fuente: Centro de Estudios Migratorios del INM con base en información de la autoridad migratoria de Guatemala, Honduras y El Salvador, para los devueltos; y de U.S. Customs and Border Protection (CBP) para los retenidos en Southwest Sector (zona fronteriza con México) por Border Patrol.

Fuente: Instituto nacional de migración-Apuntes sobre Migración, 2011.

3.1.2 Políticas migratorias actuales

Las propuestas antiinmigrantes se han mezclado con las diferentes esferas del Estado. Ya no solo es un tema federal, sino también de agentes locales. Esto se evidencia “en 2005 se introdujeron propuestas y se promulgaron 38 leyes de este tipo, para 2007 la legislación relacionada con asuntos de migración se triplicó y pasó a 1562 propuestas y 240 leyes” (Massey, Pren y Durand, 2009, p. 111). Lo anterior se refleja en las medidas que

tomaron los Estados que presentan un alto número de inmigrantes provenientes especialmente de México, Guatemala, El Salvador y Honduras.

En 2009, California tenía el mayor número de residentes inmigrantes centroamericanos con un total de 29,0 % de la población total de inmigrantes centroamericanos en Estados Unidos, seguida por Texas 12,3 % y Florida 11,7 %. La población Centroamericana presentó un cambio porcentual aumentado en un 100 % o más en dieciocho estados entre 2000 y 2009, como en el estado de Georgia, que tuvo un aumento de 120,4 %, Carolina del Norte con un aumento de 120,2 % y Maryland que tuvo un aumento de 99,6 % de residentes inmigrantes centroamericanos (MPI, 2010).

Estos estados decidieron formular proyectos de ley en los cuales se clasifica la migración ilegal como un delito, ya que argumentaron que las iniciativas por parte del Gobierno federal no cumplen a cabalidad con los controles fronterizos. El argumento en el que se basan funcionarios y senadores norteamericanos es que

aparentemente el Gobierno Federal no está tomando ningún tipo de acciones para contrarrestar y detener la migración ilegal y que son los estados fronterizos y con mayor presencia de población de origen latino los que sufren las consecuencias con la presencia de indocumentados (Alveranga, Arias y Díaz, 2013, p. 56).

Tal es el caso para el estado de Arizona con la Ley migratoria SB1070 vigente el 23 de abril de 2010, con el objetivo de desalentar y disuadir la entrada ilegal y la presencia de extranjeros ilegales y la actividad económica por extranjeros ilegales en Estados Unidos.

Las premisas más importantes de esta ley son las siguientes:

- Los oficiales de policía del estado de Arizona pueden detener a las personas sin orden judicial, bajo la sospecha de ser inmigrante no autorizado, lo cual lleva a la deportación y expulsión.

- Se considera crimen contra el Estado norteamericano que los extranjeros autorizados que circulen por Arizona, no porten sus documentos migratorios.
- Se prohíbe solicitar empleo y ser contratado para una persona indocumentada (Summary of Arizona SB 1070).

Al igual que el estado de Arizona, en Florida se aprobó el proyecto de ley SB 2040 vigente desde el 15 de abril de 2011, en el que se implementan acciones restrictivas contra los inmigrantes indocumentados. En primera medida se criminaliza la estadía indocumentada, imponiendo sanciones de hasta 500 dólares a los empresarios que no verifiquen el estatus migratorio de sus trabajadores, además de proponer a los jueces el aumento de las penas si al cometer algún delito también es migrante irregular.

En el estado de California se han presentado varias iniciativas de ley como la Ley AB 39 destinada a regular la migración ilegal. La iniciativa AB 271 que propone prohibir que cualquier persona que resida ilegalmente en el estado reciba los mismos beneficios de una persona con residencia legal. Y la iniciativa de ley SCM 1003, que solicitó al Congreso estadounidense una reforma a la Constitución para negar la ciudadanía a personas que hayan nacido en territorio estadounidense, de padres indocumentados (CNDH, 2009).

Las anteriores articulan los mismo objetivos, entre los que se destacan la criminalización de la estadía indocumentada, las sanciones impuestas a personas que contratan mano de obra indocumentada, multas cuantiosas o días-años en prisión y la verificación del estatus migratorio en escuelas, caseros y vía pública (CNDH, 2011).

Por otra parte, el proyecto de ley aprobado el 13 de junio de 2013 para la Seguridad Fronteriza, Oportunidades Económicas y Modernización Económica estableció nuevos parámetros de seguridad en las fronteras, ya que el Gobierno estadounidense quiere cerrar

las posibilidades de los cruces de indocumentados para comenzar un proceso de regularización con los migrantes que no han definido su situación de permanencia en el territorio de manera legal.

Esta ley está dividida en cinco títulos: 1. Seguridad fronteriza; 2. Reformas a los programas de visa de inmigrante y disposiciones de integración de los inmigrantes; 3. Aplicación interior, aborda el E-Verify; 4. Reformas para programas de visa para no inmigrante; 5. Fondo de trabajo para los jóvenes (Moreno, 2013).

Entre las reformas de visa se plantea formular el Inmigrante Provisional Registrado (RPI) para aquellos inmigrantes indocumentados a partir del 31 de diciembre de 2011 con visa por seis años prorrogable, y deben esperar diez años para solicitar el estatus de Registro Legal Permanente y otros tres años para naturalizarse, además su núcleo familiar podrá solicitar el estatus legal ante las instituciones migratorias.

3.2 Efectos de las políticas en los migrantes del Triángulo Norte

Desde la reforma IIRAIRA de 1996 hasta las más recientes reformas, se han implementado toda clase de mecanismos para el control fronterizo. La asociación de la seguridad nacional al fenómeno migratorio y los riesgos que tienen los migrantes en su recorrido por la frontera no ha logrado una disminución a gran escala de la migración irregular.

Al contrario, la población hispana ha aumentado de forma constante durante el último medio siglo. Según Pew Hispanic Center en 2014 los hispanos representaban el 17,3 % de la población total de Estado Unidos, muy por encima del 3,5 % en 1960. Este

aumento evidencia que “el aumento en la vigilancia y en la militarización de la frontera no ha tenido un efecto significativo en los planes de las personas que piensan cruzar sin documentos la frontera con Estados Unidos” (CNDH, 2009).

De acuerdo con Migration Policy Center (2010) el establecimiento de la política militar en la frontera y el aumento de la seguridad fronteriza desde 1994, no han surgido efectos que generen la deserción de los inmigrantes por cruzar la frontera con éxito: “alrededor de 45 % de los inmigrantes es capturado por lo menos una vez en su intento, pero 97 % logra entrar eventualmente” (p. 3).

Con la implementación de las políticas antiterroristas la imagen del inmigrante cambió radicalmente. La población estadounidense se sentía amenazada por los inmigrantes, para el 2006 la mitad de los adultos norteamericanos opinaba que: “los inmigrantes eran una amenaza para los valores del país” y que “la población debía estar protegida para enfrentarse a la influencia extranjera” (Massey, 2012).

Al tildar al migrante como amenaza, el Gobierno estadounidense tomó iniciativas armamentistas y restrictivas en pro de preservar la seguridad nacional, generando cada vez más cambios en las políticas gubernamentales. “No se puede negar que los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001, y las posteriores medidas de prevención, han ampliado las concepciones de seguridad nacional, estigmatizando los flujos migratorios” (Vélez, s.f.).

El enfoque antiinmigrante y los procesos judiciales de deportación se han categorizado en no reconocer al migrante como un individuo con derechos, imponiendo condiciones de vida más difíciles para los migrantes. Tal como lo menciona Human Rights Watch (2007)

[...] la legislación de derechos humanos exige una audiencia justa en la cual los vínculos familiares y de otra índole de una persona inmigrante con el país anfitrión

sean sopesados frente al interés de una nación en deportarla. Es desafortunado que esto sea precisamente lo que la ley inmigratoria estadounidense no hace: no les ofrece oportunidad alguna a los jueces de inmigración para que puedan poner en la balanza el crimen de un individuo contra sus relaciones familiares, otras conexiones con Estados Unidos —como el servicio militar o los vínculos económicos— o el temor de sufrir persecuciones en su país de origen (p. 6).

La frontera México-Estados Unidos conlleva graves vulneraciones a los derechos humanos, bajo la bandera de la seguridad nacional. El control migratorio no solo afecta a la población fronteriza, también a los migrantes irregulares y residentes legales en Estados Unidos que están sujetos a los controles periódicos. Los abusos que se presentan por parte de las autoridades fronterizas, se registran en la puesta en marcha de la etapa I de la operación Guardián en 1994, en la que la violación a los derechos humanos por parte de las autoridades fronterizas hacia los migrantes irregulares se hizo más evidente, “22,5 % manifestaron maltrato físico, con golpes y heridas, el 6 % maltrato verbal; y el 27,5 % abuso de autoridad como destrucción de documentos o prendas personales” (Villaseñor y Morena, 2002, p. 10).

En 2006 vivían en Estados Unidos entre 11,5 y 12 millones de inmigrantes no autorizados. La población indocumentada del Triángulo Norte que residía en Estados Unidos para el 2006 era 575.000 de El Salvador, 450.000 de Guatemala y 250.000 de Honduras del total de inmigrantes irregulares. En contraste con la población en el 2000, el Salvador representaba 500.000 habitantes, Honduras 140.000 y Guatemala 200.000 (Pew Hispanic Center, 2014).

La recesión que inició en Estados Unidos en 2007 desencadenó una tasa de desempleo de 10,2 % para octubre de 2009. La población inmigrante particularmente de México y Centroamérica se vio afectada por el colapso del sector inmobiliario debido a la

burbuja inmobiliaria, lo que generó despidos masivos, así como la reducción en la demanda de esta mano de obra, por lo que se redujo el flujo migratorio (MPI, 2010). No obstante, “es importante señalar que el freno del crecimiento de la población indocumentada en Estados Unidos no significa lo mismo que el retorno masivo de migrantes a sus países de origen” (CNDH, 2009)

La crisis económica y financiera, así como el aumento del control fronterizo y la violencia que se presenta en la frontera mexicana han influido en la disminución de los flujos migratorios, sin embargo, la migración irregular no se ha detenido ni ha presentado disminuciones significativas en la última década. En 2012, 40,4 millones de inmigrantes vivían en Estados Unidos, lo que representó el 13 % de la población total, para el 2014 la población inmigrante representó 55,3 millones de la población estadounidense, y más de once millones están en el país sin autorización en comparación con los 12,2 millones del año 2007.

La presencia de migrantes indocumentados y el aumento de trabajadores temporales, generó que se extendiera la gestión legislativa, tanto federal como en los diferentes estados, pretendiendo limitar una serie de derechos a los que podían acceder los inmigrantes anteriormente (Massey, Pren y Durand, 2009). Esto se evidencio con la aprobación de la Ley SB 1070 de Arizona, que logró una menor entrada de migrantes y la salida de alguno de ellos hacia otros estados.

Una disminución de la mano de obra migrante tendría efectos adversos en la economía de este estado una reducción de 15 % en la fuerza laboral migrante en la agricultura llevaría a la perdida de poco más de 3000 empleos de tiempo completo. En el sector de la construcción una perdida en la población migrante de 15 % correspondería a

perder 56 mil empleos de tiempo completo y una pérdida económica de 6,6 mil millones de dólares (como se cita en Ordaz, 2013, p. 7).

La política pública estadounidense, que ha tenido como objetivo mitigar y controlar la migración indocumentada, ha tenido, el efecto de “interrumpir en el funcionamiento de la máquina perfecta que, de otra forma, sería el flujo migratorio que atiende a un mercado laboral transnacional” (Hernández, 2008). Por lo anterior es claro que las políticas migratorias tienen como objetivo la deportación de los inmigrantes más allá de su aceptación y vinculación social, no obstante, en este contexto Estados Unidos se ha visto afectado en cuanto a la mano de obra que los inmigrantes representan en el desarrollo económico de sectores específicos.

Capítulo 4. No entendimiento o entendimiento limitado de los factores expulsores

De acuerdo con el análisis desarrollado en el capítulo anterior sobre las políticas migratorias estadounidenses y sus efectos en la población perteneciente a los países del Triángulo Norte, se evidenció cómo estas políticas tienen como objetivo mitigar la migración desde el punto de vista de seguridad nacional, sin tener en cuenta la situación que implican las dinámicas migratorias de los países del sur.

Con el fin de enfocar la atención en el contexto sociopolítico del fenómeno migratorio conviene destacar algunas particularidades respecto al desarrollo de este en el interior de Estados Unidos. Para el 2012 la población hispana había crecido un 43 % en este territorio, son 50,5 millones de personas las que representan un 13 % de la población estadounidense. Según Real Clear Politics, cada mes 50.000 jóvenes latinos alcanzan la mayoría de edad y se espera que el porcentaje de votantes latinos aumente al 11 %, del electorado total, en comparación al 9,5 % de 2008 (Paredes, 2012). “El voto latino pesa cada vez más y se ha convertido en una fuerza cada vez más activa y, en algunas regiones, determinante para la elección de candidatos demócratas o republicanos” (Escobar y Toledo, 2010, p. 61).

Esto aumentaría las posibilidades en la participación política de la comunidad latina en la reforma migratoria, ya que esta sería una solución para los migrantes irregulares que viven en los Estados Unidos, los cuales han aumentado de 8,4 millones en el 2000 a 11,1 millones para el 2011 (Pew Hispanic Center, 2015).

Es en esta situación en la que se presentan disyuntivas políticas sobre las acciones que deben tomarse frente a la población latina e inmigrante que habita ilegalmente en Estados Unidos. Los dos partidos políticos, el Republicano y Demócrata, han disputado en un largo debate la reforma que se debe llevar a cabo para solventar la seguridad nacional, principal objetivo que debe ser salvaguardado en la visión estadounidense.

Es por esto que este país ha tomado la iniciativa de poner en marcha ciertos programas que ayuden a aumentar la seguridad y la lucha contra el narcotráfico con los países que originan mayor cantidad de migrantes. En este capítulo se pretende exponer la posición actual del gobierno norteamericano frente a la migración irregular de los países del Triángulo Norte, así como las políticas gubernamentales, discursos políticos y decisiones bilaterales que han sido adoptadas entre estos países.

4.1 Contraste de factores expulsores con las políticas estadounidenses

Hasta la década de 1970, la relación entre América Latina y Estados Unidos estuvo definida por la “presunción hegemónica” por parte de este último. Desde la Guerra Fría — como antecedente— Estados Unidos tenía una política intervencionista en los países latinoamericanos con la preferencia del dominio regional, por tanto era importante para el gobierno de la época mantener firme control en territorios como El Salvador y Nicaragua. Este escenario actualmente se presenta, no con el mismo arraigo de la época ni con el discurso (acabar con el comunismo), pero si con otro fenómeno, el de la migración. Ya que

[...] encontraban su causa no tanto en consideraciones de “seguridad nacional” —como por entonces solía pretenderse—, sino de “inseguridad nacional”, que es un impulso psicopolítico: el miedo a perder el control sobre lo que Estados Unidos había controlado durante mucho tiempo: los convenios internos y los vínculos externos de los países de la región fronteriza en torno al Caribe. Ese impulso reflejaba los arrastres inerciales de las actitudes y políticas hacia el exterior formados en una era anterior (Lowenthal, 2007, p. 1).

La política migratoria actual en Estados Unidos se desarrolla bajo la premisa de la seguridad nacional, ignorando los aspectos económicos políticos y sociales, que son la razón de los movimientos migratorios provenientes del Triángulo Norte. Las acciones encaminadas a mitigar este “problema” por parte del país del norte, se ha centrado en el aumento de acciones restrictivas que impactan de manera negativa la situación del migrante y el proceso de migración.

La implementación de medidas restrictivas ha aumentado la seguridad fronteriza. Los migrantes se ven obligados a usar otras rutas de cruce utilizando medios de transporte no seguros. Adicionalmente, en el recorrido, los migrantes están expuestos a la acción e incremento de los grupos delictivos, y son blanco de extorción o abuso, hechos asociados a las autoridades fronterizas y a la dinámica migratoria de este decenio.

[...] nada indica que estos factores se hayan considerado en la formulación de las políticas de migración en Estados Unidos. Ante una situación de mayores riesgos, el énfasis se ha puesto en la seguridad de los agentes, principalmente de la Patrulla Fronteriza, y menos en la de los migrantes. A pesar de que el mayor énfasis en la política de fronteras es la seguridad, la frontera se ha vuelto más insegura para quienes viven, trabajan y transitan por ella (Herrera, González, y Rocha, 2009, p. 9).

La migración, al ser uno de los temas principales entre Estados Unidos y los países del Triángulo Norte, ha generado que las relaciones pierdan su enfoque integral. Aunque este tema ha sido objeto de diálogo o debate multilateral no se han generado soluciones que abarquen de manera puntual este fenómeno, lo que afecta un alto porcentaje de la población centroamericana. La seguridad fronteriza promovida por el gobierno estadounidense hacia los países centroamericanos se basa en la lucha contra el tráfico de drogas y las mafias transfronterizas. Estas naciones han desarrollado algunas iniciativas para trabajar en conjunto con el fin de mitigar los efectos que las acciones delictivas desencadenan en estos

territorios, así como de fortalecer el compromiso y la integración internacional en pro del bienestar y la justicia social.

En primer lugar, se planteó la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI en inglés), que cuenta con un apoyo económico estadounidense de 203 millones de dólares para los tres primeros años de la iniciativa (ver tabla 5). Esta iniciativa hace parte de la política norteamericana para combatir delitos transfronterizos como el narcotráfico, dado que afecta la seguridad fronteriza.

Por otra parte, se encuentra la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (CARSI), en la cual

[...] los gobiernos centroamericanos comparten el deseo de romper el poder, la violencia y la impunidad de las organizaciones de narcotraficantes, pandillas, y criminales de la región y fortalecer las instituciones de aplicación de la ley y judiciales para promover el estado de derecho, resistir la corrupción y prevenir la extensión de la delincuencia organizada (CARSI, 2012).

Esta iniciativa se basa en los programas de prevención de la delincuencia (ver tabla 5), y ha demostrado resultados alentadores, pues han disminuido los índices de victimización por delincuencia y violencia en robos, venta de drogas y asesinatos, para el Salvador 25 %, 36 %, 51 % respectivamente; Guatemala 27 %, 50 %, 60 %, respectivamente; Honduras 35 %, 37 % y 43 %, respectivamente (Departamento de Estado, Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, 2012).

También está la Iniciativa o Plan Mérida, en la cual el Gobierno de Estados Unidos ha influenciado exponencialmente sobre el uso militar en la frontera y en el combate transnacional, tanto en México como Centroamérica. Esta iniciativa contó con objetivos relacionados en la cooperación internacional, en el sector productivo, medio ambiente y el financiamiento al sector agrícola de los países centroamericanos. Sin embargo, a medida

que la seguridad de la frontera norte empeoró, los lineamientos fueron cambiando de foco, hasta concentrarse netamente en la seguridad nacional (Chabat, 2010).

Asimismo se puede apreciar en el accionar mexicano, en el cual se incrementó el número de policías federales, los arrestos y extradiciones de narcotraficantes y el abastecimiento en armas y equipos de control en la frontera norte. En la iniciativa se han rechazado otros aspectos, como políticas de desarrollo y una reforma a las instituciones judiciales, por ejemplo, “una de las principales críticas a la Iniciativa Mérida ha sido su enfoque en la transferencia de tecnología y capacitación de seguridad, sin poner suficiente énfasis en darle a México las herramientas necesarias para la reforma de sus instituciones” (Cámara de Comercio México-Estados Unidos, 2011, p. 1).

Por último, la Alianza para la Prosperidad nace de la unión de tres países centroamericanos, El Salvador, Honduras y Guatemala, con la colaboración de Estados Unidos y diferentes instituciones como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Es la iniciativa más actual y cuenta con un presupuesto de 1000 millones de dólares con el objetivo de mejorar la seguridad, la educación y el empleo de los países del Triángulo Norte.

De acuerdo con esta iniciativa, los países del Triángulo Norte se han preocupado por generar las condiciones necesarias para la implementación del plan. El Salvador ha mantenido la estabilidad macroeconómica generando inversión y seguridad pública, así como la consolidación del Estado y la democracia. En Guatemala se incrementó el personal de policía reduciendo la tasa de homicidios y se ha implementado la política nacional de desarrollo rural integral. Por su parte, Honduras ha aumentado el combate a la corrupción y

el fortalecimiento del manejo de los recursos (Plan de la Alianza para la prosperidad del Triángulo Norte, 2015).

Las iniciativas por parte del Gobierno estadounidense tienen como máxima la incorporación de medidas contra el terrorismo. Se evidencia que el discurso de la seguridad nacional y fronteriza influye en las relaciones bilaterales demarcando la guía bajo la cual los países centroamericanos y del Caribe deben regirse (tabla 5). En las propuestas anteriores el tema migratorio se reduce a la lucha contra el crimen organizado, dejando de lado la situación institucional y social que se presenta en los países del Triángulo. “Con frecuencia, la política migratoria de Estados Unidos tiene poco que ver con tendencias y patrones de inmigración, por paradójico que parezca” (Massey, Pren y Durand 2011, p. 211).

Tabla 5

Programas de ayuda por parte de Estados Unidos hacia Centroamérica

Programas	Objetivos	Presupuesto
Iniciativa de la cuenca del Caribe (CBSI)	Creación de una red de intercambio de información regional, mejora a la coordinación marítima para la interceptación, y el desarrollo de la capacidad de formación regional.	203 millones de dólares para los tres primeros años de la iniciativa.
Iniciativa Regional de Seguridad para	Crear un espacio seguro para los ciudadanos, acabando	161,5 millones de dólares, con el aumento del 3,5% a partir del 2012.

América Central	con los movimientos criminales y el contrabando, restableciendo la presencia del Estado, fomentando mayores niveles de coordinación y cooperación entre la región.	
Plan Mérida (2007)	Es un tratado de seguridad internacional que tiene como principal objetivo combatir el narcotráfico y el crimen organizado.	\$310 millones de dólares para programas relacionados con la Iniciativa Mérida en el presupuesto del año fiscal 2011.
Alianza para la Prosperidad	Crear oportunidades económicas dinamizando el sector productivo aumentando la calidad del capital humano. Además, de mejorar la seguridad y el acceso a la justicia fortaleciendo las instituciones.	1000 millones de dólares.

Fuente: elaboración propia, con base en Departamento de Estado, Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental (2012), Cámara de Comercio de México (2011), Coalición Centroamérica Democrática (2015).

En relación con lo anterior, Estados Unidos ha participado activamente en las diferentes iniciativas bilaterales que se enfocan en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico con el fin de mitigar los problemas que actualmente empeoran la situación de la población centroamericana. La participación estadounidense estimula la inversión privada y extranjera que promueve una coordinación eficaz en el cumplimiento de los objetivos, como la integración internacional de la región, el restablecimiento del Estado y la seguridad, combatiendo los movimientos criminales y el contrabando.

Para el 2016, la agenda del presidente Obama tenía como objetivo la aprobación por parte del Congreso estadounidense un nuevo presupuesto para ayudar a los países del Triángulo Norte. La discusión parte de la solicitud de mil millones de dólares por parte de la administración Obama para la atención de los problemas de violencia, falta de oportunidades y débil gobernabilidad que impulsan la migración en esta región (Beltrán, 2015).

En relación con este nuevo presupuesto se incluyen los siguientes parámetros para su aplicación:

- Aumento sustancial de los niveles de asistencia para la región. La Ley de asignaciones otorgó 750 millones de dólares en asistencia a los países del Triángulo Norte.
- La inclusión de una agenda más amplia, enfocada no solo en la seguridad, sino también en la débil gobernabilidad y los problemas económicos que enfrenta la región.

- Condiciones claras en materia de planificación y coordinación que debe efectuar el Departamento de Estado previa asignación de los fondos (Beltrán, 2015).

Sin embargo, el objetivo estadounidense como se ha mencionado, se enfoca solo en la seguridad, ya que, “Estados Unidos requirió un concepto que expresara un esfuerzo con componentes militares y no militares, y que justificara una política con más fuerza que antes” (Waever, 2004, p. 79). Esto deja en entre dicho el actuar norteamericano: sus iniciativas no plantean soluciones de fondo en los países centroamericanos, ni soluciones frente al fenómeno migratorio, al contrario, solo hacen hincapié en su concepción de amenaza.

Por otra parte, el Congreso estadounidense no considera necesario invertir un alto presupuesto en las iniciativas que se proponen para tratar el problema migratorio, ya que se han presentado diferentes situaciones que aumentan la incertidumbre frente a la capacidad del manejo de los recursos por parte de los países del Triángulo Norte. Por ejemplo, los hechos de corrupción y de desestabilización política en los países centroamericanos, especialmente Honduras y Guatemala, han dificultado la puesta en marcha de la iniciativa del Plan para la Prosperidad entre Estados Unidos y el Triángulo Norte (Chabat, 2010).

El contexto social y político de los países del Triángulo se ve afectado por tres factores determinantes: la violencia provocada por el crimen organizado, la pobreza y corrupción en las instituciones. En los últimos cinco años, la situación de los países del Triángulo ha empeorado. Según la Oficina de la Naciones Unidad contra la Droga y el Delito (UNODC, 2012), la tasa de homicidios promedio en el mundo es de 6,2% por 100.000 habitantes, sin embargo, en países como Honduras esta llega a ser de 90,4

homicidios por 100.000 habitantes, en Guatemala es de 39,9 y El Salvador es de 41,2. Además los grupos delincuenciales han permeado todas las instancias políticas y han tomado mayor poder en las fronteras.

Toda la responsabilidad recae sobre los países del Triángulo, tal como lo afirma la coalición Centroamérica Democrática citando a Beltrán (2015): “el éxito del paquete de asistencia de Estados Unidos depende de que los gobiernos centroamericanos estén firmemente comprometidos a erradicar la profunda corrupción, la impunidad generalizada y la falta de rendición de cuentas que han impedido el progreso” (Coalición Centroamérica Democrática, 2015, p. 2).

4.1.2. Contraste con los discursos George W. Bush, Barack Obama y Homeland Security

Las políticas migratorias están fundamentadas bajo la percepción de que los migrantes irregulares suponen ser una amenaza, y por tanto, un problema de seguridad. No obstante, los retos de la migración irregular los afrontan tanto países expulsos como países receptores. Estas políticas de control migratorio y fronterizo “han sido erráticas y dictadas por condiciones coyunturales y posturas políticas, que responden, principalmente, a intereses y presiones políticas” (Hernández, 2008, p. 194).

Uno de los principales grupos de interés frente a la migración ha sido el de los empresarios, ya que se ven beneficiados, especialmente, en el sector agrícola al contratar mano de obra a bajo costo.

Ejemplo de ello ha sido el planteamiento del Presidente Bush y varios legisladores desde enero del 2004 a favor de un programa de trabajadores temporales, pero en contra de la regularización inmediata y residencia permanente (amnistía) para los trabajadores indocumentados que ya están en Estados Unidos, en su gran mayoría latinoamericanos (Hernández citando a de Génova, 2008 p. 194).

En el 2007, bajo el mandato de George W. Bush se creó la propuesta de una reforma migratoria con la iniciativa conocida como *Strive Act (The Security through Regularized Immigration and Vibrant Economy Act, HR 1645)*. Esta iniciativa procuró promover un nuevo sistema de verificación laboral así como la disposición de regularización de inmigrantes irregulares en Estados Unidos (Herrera, González y Rocha, 2009). Los puntos más importantes eran: la seguridad fronteriza, incrementando personal de *Border Security*. Se incrementaron las penas respecto a la falsificación de documentos y las sanciones a trabajadores que contraten personas indocumentadas. Se creó una nueva categoría de visa H-2C, visa de trabajo, que creó un canal legal para futuros trabajadores, y la legalización de inmigrantes indocumentados bajo ciertos requisitos, como no tener antecedentes criminales, haber ingresado antes de 2006 y hacer un pago de dos mil dólares (Summary of Strive Act, 2007).

También se incluyó el programa *Dream Act* que es la legislación federal, que ofrecería un estatus legal y el acceso a la asistencia financiera para los jóvenes estudiantes indocumentados (Dream Act, 2007).

El discurso del expresidente Bush sobre una reforma migratoria integral tenía dos objetivos: incrementar la seguridad fronteriza y la ejecución de las leyes al interior del país. Para esto, incrementó en un 66% los fondos de la patrulla fronteriza y endureció los controles para verificar si los trabajadores eran legales, puesto que era importante que los empleadores fueran responsables de los trabajadores que contrataban (Herrera, González y Rocha, 2009).

Tal como lo afirma en un discurso el expresidente Bush “Una reforma integral de la inmigración debe asumir la realidad de que millones de inmigrantes ilegales ya están aquí”; oponiéndose a la amnistía, señala que:

La amnistía sería injusta para quienes están aquí legalmente e invitaría futuras oleadas de inmigración ilegal. Hay un punto medio razonable entre dar una vía automática para la ciudadanía a todos los inmigrantes ilegales y un programa que requiere que todos los inmigrantes ilegales se vayan (Bush, 2006).

En su último discurso, el 28 de enero de 2008, la referencia del ex presidente Bush al tema migratorio fue:

Estados Unidos necesita asegurar sus fronteras, mi administración está tomando medidas para ello. Aumentamos la aplicación de la ley en los lugares de trabajo, desplegamos enrejados y tecnología avanzada para frenar los cruces ilegales, hemos terminado efectivamente con la política de “agárralos y suéltalos” en la frontera, sin embargo, debemos reconocer que no vamos a asegurar nuestra frontera hasta crear una manera completamente legal para que los trabajadores extranjeros vengan y apoyen nuestra economía. También debemos encontrar una manera sensible y humanitaria para tratar con las personas que se encuentran aquí ilegalmente. La inmigración ilegal es complicada, pero es un problema que se puede resolver (Rocha et al., citando a Bush, 2008, p. 391).

La agenda migratoria de Bush tenía dos puntos importantes a desarrollar: 1. Ley en las fronteras; y 2. Programa de trabajadores temporales. Para desarrollar el primer punto el expresidente Bush planteó lo siguiente

Doubled the Border Patrol to more than 18,000 agents, equipped the Border Patrol with better technology and new infrastructure, and effectively ended the process of catch and release at the border. Increased border security and immigration enforcement funding by more than 160 percent and constructed hundreds of miles of fencing and vehicle barriers (Policies of the Bush Administration, 2001-2009).

Para el desarrollo del punto dos, la administración de Bush brindó nueva información sobre la reestructuración de las categorías de visa y la documentación biométrica que permitiría a los funcionarios rastrear a los inmigrantes que permanecieron en territorio estadounidense más allá del plazo sancionado. La administración Bush señaló que “a temporary work program would greatly bolster border security and national security, since opening legal

channels would lessen numbers of those attempting to enter illegally and would allow officials to track immigrants who would otherwise come clandestinely” (Gelatt, 2005).

Este discurso muestra una clara comprensión frente a la situación migrante, sin embargo, “en la frontera, la migración aparece siempre en el marco de la seguridad como un factor de riesgo, y las medidas para atenderla han sido consistentemente restrictivas” (Herrera, González y Rocha, 2009, p. 392).

Al intensificar los programas de control fronterizo por parte de la Casa Blanca y la nueva política antiterrorista después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, la amenaza terrorista está representada en los inmigrantes, quienes ven afectados sus derechos a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos (Alvarenga, Arias y Díaz, 2013).

Según la Federación Internacional de los Derechos Humanos (2008), a partir del 2001, con las nuevas medidas de control en la frontera, el número de muertos ha aumentado dramáticamente hasta llegar a 473 en 2005, además se evaluó que en el transcurso de los últimos doce años han muerto más de 4000 migrantes. Esto refleja el abuso de autoridad de la fuerza pública ubicada en la frontera entre México y Estados Unidos.

El enfoque republicano ha generado un constante enfrentamiento con sus opositores demócratas, debido a que estos han procurado no apoyar las políticas restrictivas ni el radicalismo frente al tema migratorio.

La administración de Barack Obama ha hecho cambios significativos en la política migratoria del año 2009. Por ejemplo, ha detenido las redadas realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), cambiando la política de deportación inmediata a los inmigrantes que se encontraban trabajando de manera ilegal,

por la iniciativa de auditorías agresivas focalizadas en hacer responsables a los empleadores de realizar prácticas contractuales que violen las leyes migratorias (Kerosky, 2010).

El discurso del presidente Obama se centra en la adopción de una política integral hacia los inmigrantes. Su objetivo es mejorar el panorama migratorio dando ciertas condiciones que deben cumplir los inmigrantes para lograr la residencia permanente y aumentar el presupuesto y personal para la seguridad de la frontera. Por tanto, anunció las siguientes medidas para que el congreso tomara en cuenta que la aprobación de la reforma migratoria ayudaría al Estado norteamericano:

En primer lugar, construiremos sobre nuestro progreso en la frontera con recursos adicionales para nuestras fuerzas del orden público para que puedan detener el flujo de cruces ilegales y acelerar el retorno de aquellos que crucen. En segundo lugar, haré que sea más fácil y más rápido para los inmigrantes altamente cualificados, licenciados y empresarios quedarse y contribuir a nuestra economía, como han propuesto muchos líderes empresariales. En tercer lugar, tomaremos medidas para hacer frente de manera responsable a los millones de inmigrantes indocumentados que viven en nuestro país (Obama, 2014).

El último punto del discurso de Obama se refiere a la no deportación, a la oportunidad que se le da al inmigrante de continuar con su vida en territorio estadounidense de manera legal.

[...]si usted ha estado en Estados Unidos por más de cinco años; si tiene hijos que son ciudadanos de Estados Unidos o residentes legales; si se inscriben se comprueba que no tiene antecedentes penales, y está dispuesto a pagar la parte de impuestos que le corresponde, entonces podrá pedir quedarse en este país de manera temporal sin temor a ser deportado. Podrá salir de la oscuridad y tener todo en regla (Obama, 2014).

Sin embargo, estas consideraciones en la reforma migratoria no tuvieron un impacto favorable en el Congreso, que negó la aprobación de la reforma en el primer mandato del presidente Obama. El debate político se encontraba cada vez más dividido, los republicanos se negaban rotundamente a la regularización y estos contaban con la mayoría

de votos tanto en la Cámara como en el Senado. Así, el 20 de noviembre de 2014, el Presidente Obama, ya en su segundo mandato, anunció una serie de acciones ejecutivas para tomar medidas sobre la migración ilegal en la frontera: la Acción Diferida para la Responsabilidad Parental (DAPA) para las personas que llegaron antes de cumplir 16 años y que han vivido en Estados Unidos. Esta acción amplió el uso de las exenciones provisionales por presencia ilegal para incluir a los familiares de residentes legales y modernizar los programas de visas de inmigrantes y no inmigrantes para crear empleo y mejorar la economía (USCIS, 2015).

Las iniciativas que se han generado por parte de los gobiernos Bush y Obama evidencian la importancia que ha tenido esporádicamente el tema migratorio en el ámbito legislativo y ejecutivo estadounidense. No obstante, estas iniciativas se concentran en acciones temporales y coercitivas, ignorando las causas de los flujos migratorios.

El problema principal que enfrenta el sistema migratorio de Estados Unidos —y que se relaciona en particular con la inmigración mexicana— es que los canales existentes para el ingreso y la estadía documentada son relativamente estrechos y no guardan correspondencia con las realidades del fenómeno migratorio (Verea, 2014, p. 165).

4.2 Contradicción de los objetivos con la instrumentalización

2.2.1 Promesas de “legalización”: reformas migratorias

Los debates migratorios se han dividido en dos posturas, por una parte las percepciones tradicionalistas republicanas, y por otra la reforma integral de los demócratas hacia la comunidad latina que se encuentra indocumentada en Estados Unidos.

En el caso de la iniciativa *Strive Act* (2007), no prosperó por diferencias irreconciliables como la internación de los inmigrantes definida como amnistía por los

congresistas más conservadores. Por otra parte, los grupos que apoyaban la reforma consideraban aspectos contradictorios como el alto costo de las cuotas de regularización, así como la ausencia de mecanismos para la reunificación familiar, el empleo permanente y la integración social.

En los ocho años del gobierno de George W. Bush no se avanzó en el tema migratorio. Respecto al tema laboral, las políticas se han concentrado únicamente en otorgar licencias laborales temporales y en el sector agrícola. El Partido Republicano dominó la toma de decisiones y solo se aprobaron en el Congreso medidas que incrementaron la seguridad de la frontera. No se aprobó ninguna iniciativa que regulara los flujos migratorios (Rocha, Gonzalez y Herrera, 2012).

Por ejemplo, solo se aprobó el programa *E-Verify* que es un sistema basado que permite a la empresa determinar la legibilidad de los empleados, así como las iniciativas *Border Enforcement, Employment Verification and Illegal Immigration Control Act (H.R. 502)* y *New Employee Verification Act (H.R. 2028)*; teniendo como objetivo fortalecer la frontera y regular a los trabajadores en los sistemas electrónicos de manera obligatoria sancionando a aquellos que no cumplan con la ley.

La reforma integral que propuso el presidente Obama contó con el apoyo de los dos grupos sindicales principales en Estados Unidos *AFL-CIO* y *Change To Win Federation (CtW)*⁷. Estos resaltan que un nuevo sistema de inmigración debe estar balanceado entre el control fronterizo y la regularización y mejoramiento de los obreros temporales, bajo la condición que los empleos deben ser transitorios y no permanentes, por tanto “los controles

⁷ Coalición de tres sindicatos (2005): The International Brotherhood of Teamsters (IBT); Service Employees International Union (SEIU); and United Farm Workers (UFW).

fronterizos deben estar suplementados por una autorización para trabajar efectivamente” (AFL-CO, 2009, p. 3).

Por otra parte, a principio de 2013 el denominado *Gang of Eight*⁸ proclamó una reforma migratoria conocida como S. 744 *Border Security, Economic Opportunity, and Immigration Modernization Act*, que fue aceptada para su discusión en la cámara baja. Sin embargo, la discusión se concentró nuevamente en el aumento de seguridad fronteriza. Además, la residencia permanente que se contemplaba para la regularización de los indocumentados se transformó en un sistema basado en méritos, es decir, los inmigrantes tienen que competir entre sí para lograr la residencia (Ordaz, 2013).

En consecuencia, la discusión política sobre la reforma migratoria evidencia varios puntos que no permiten avanzar de su fase de deliberación. En primer lugar, la reforma migratoria se ha politizado, es decir, en el periodo de elecciones bastantes legisladores estarán en campaña buscando su reelección, en el que el tema migratorio se vuelve difícil de tratar.

Es así como los senadores que representan estados claves en materia migratoria como: California, Arizona, Nuevo México, Florida, Texas y Nueva York, se convierten en piezas centrales dentro del procesos de formulación de políticas estatales de control fronterizo o de reforma migratoria (Alveranga, Arias y Díaz, 2013, p. 74).

El grupo latino se convierte en una población atractiva puesto que representan el 13 % de posibles electores, es por esto que los candidatos refuerzan sus intentos de captar el interés de estos grupos electores. Lo anterior se debe a que “el voto latino pesa cada vez más y se ha convertido en una fuerza cada vez más activa y, en algunas regiones,

⁸ Grupo de los Ocho, integrado por cuatro senadores del partido demócrata (Chuck Schumer, Michel Bennet, Richard Durbin y Bob Menendez) y cuatro senadores del partido republicano (Marco Rubio, John McCain, Jeff Flake y Lindsey Graham).

determinante para la elección de candidatos demócratas o republicanos” (Escobar y Toledo, 2010, p. 61).

Según los estudios realizados por Pew Hispanic Center (2008) para el año 2008 votó el 10 % de 14 millones de población hispana con derecho al voto, en comparación con los 7,5 millones de hispanos que votaron en 2004. El 67 % del electorado hispano votó por Barack Obama, mientras que en 2004 George W. Bush solo capturó el 33 % de los votos hispanos. En los estados de mayor importancia de voto hispano se evidenció un aumento de captación de votos por parte del Partido Demócrata conforme aumentaban los escenarios de llevar a cabo la reforma migratoria. En New México, el voto hispano que apoyo a Obama fue de 78 %; en Florida 57 % y el 70 % en California (Pew Hispanic Center, 2008).

Las acciones políticas estadounidenses frente a la migración evidencian claras contradicciones: en primer lugar, aunque se quiera regularizar el fenómeno, el estatus de criminal que tiene el inmigrante genera prejuicios en el desarrollo de la propuesta ante los legislativos. En segundo lugar, las iniciativas de trabajo temporal no brindan una solución a largo plazo sobre la situación del migrante irregular y su familia. Por último, se evidencia que la población hispana está de acuerdo con apoyar al candidato que asegure un cambio en la situación migratoria, sin embargo, al pasar los dos periodos de mandato del presidente Obama la reforma no pasó de los debates en la Cámara, pues como se ha mencionado, la polarización política entre demócratas y republicanos ha generado un choque de poderes que afectan a los más de 11,7 millones de latinos indocumentados.

4.2.2 Resistencia GOP (Partido Republicano) judicial, enmiendas, IX, X

La resistencia política por parte de los congresistas republicanos ha perjudicado el desarrollo de la reforma migratoria. Al contar con la mayoría de representantes en ambas cámaras (alta y baja), han dominado la toma de decisiones en cuanto a la reforma. De igual manera, frente a la propuesta del presidente Obama, el GOP se opone radicalmente a la regularización de los migrantes, alegando que la decisión que toma el gobierno terminaría cumpliendo con los requisitos de la figura como la amnistía.

Los argumentos que han usado los congresistas republicanos en contra a la mencionada reforma migratoria S. 744, han sido los mismos en las discusiones sobre reformas migratorias desde el año 2004, según Ordaz (2013)

- Al regularizar a los indocumentados se produciría un aumento del gasto público al crecer la demanda de educación, servicios de salud, vivienda, etc.
- Se genera amnistía, concepto que alude recompensa a aquellos que violaron la ley al entrar al país sin documentos.
- Garantizar el estado de bienestar de los indocumentados —ahora ciudadanos— aumentaría el riesgo de la política fiscal estadounidense que se traduciría en un menor apoyo de esta economía a situaciones o conflictos de orden mundial.
- Aumentarían los flujos migratorios de transito irregular, en busca de la amnistía.
- La posición de la Cámara de Representantes ha sido negativa frente al apoyo a la reforma migratoria integral. El presidente de la Cámara, Republicano de Ohio, estableció la regla Hastert, la cual estipula que ningún proyecto de ley se presentará a votación a menos que la mayoría de la mayoría haya mostrado su apoyo (Hastings, 2013).

Es por esto que la mayoría de iniciativas aprobadas han sido restrictivas, por ejemplo: 1. *Seguridad en las fronteras*, se aprobó el proyecto de ley de Resultados de Seguridad Fronteriza (HR 1417) y la ley SAFE (HR 2278), presentada por los representantes republicanos de los estados California del Sur y Virginia. 2. *Seguridad en el interior*, aprobándose el proyecto de ley para una fuerza laboral legal (HR 1772), presentada por el representante republicano Lamar Smith (Verea, 2014).

Las iniciativas anteriores reflejan la posición del partido republicano en el ítem de seguridad de la reforma migratoria. De acuerdo con las iniciativas expansivas, se identifica su clara negación hacia la regulación de los inmigrantes, aunque advierten que generar deportaciones masivas a gran escala generaría eventos contraproducentes en su territorio. Sin embargo, en cuanto a las modificaciones al sistema de visas se aprobó la propuesta *Skills Visa Act* (HR 2131) presentada por un representante republicano de California, la cual pone especial énfasis en la admisión de inmigrantes con alta capacitación (Verea, 2014)

Por otra parte, la posición frente al programa de trabajadores temporales, se mantiene en la postura de no dar la residencia permanente. El proyecto de Ley de Trabajadores huéspedes agrícolas (HR 1773), presentado por un representante republicano de Virginia, propuso admitir alrededor de 500.000 extranjeros al año para trabajos agrícolas sin la posibilidad de obtener residencia permanente (Verea, 2014).

Debido a la centralización de la seguridad nacional impartida en la guerra contra el terrorismo y la politización de la reforma migratoria, los republicanos se han encargado de delimitar el tema migratorio a la seguridad nacional. Se evidencia, “que existen muchos

representantes opuestos a un proyecto de legalización y mucho menos a un camino hacia la ciudadanía para los indocumentados” (Moreno, 2013, p. 19).

Conclusiones

En esta investigación se ha podido establecer una serie de relaciones explicativas sobre la política de migración norteamericana a partir de la hipótesis formulada para tal fin. Esta postulaba que la política migratoria estadounidense no ha logrado detener ni mitigar el fenómeno de la inmigración, debido, por un lado, a problemas de formulación de las medidas y, por el otro, de factores expulsivos de los países fuente.

Se analizó por qué el tema migratorio se convirtió en un tema de seguridad. Desde las observaciones de seguridad de la Escuela de Copenhague, esta consiste en liberarse de las amenazas manteniendo el Estado su identidad e integración frente a las fuerzas de cambio hostiles (Buzan, 1991). El interés en Buzan radica en ver la manera en que son construidas las amenazas y aceptadas como problemas de la seguridad, tal es el caso de tipificar como delito la residencia irregular del extranjero en un territorio.

Por tal motivo la migración ha sido considerada como amenaza y objeto del proceso de securitización, ya que el discurso que la categoriza proviene de una tecnología política propia de la gobernabilidad contemporánea, que en su intento de moldear la figura del migrante como riesgo refleja los intereses de un modelo particular de relaciones sociales, en algunos casos sin respetar los derechos humanos ni los principios del Estado de Derecho.

Las políticas de seguridad se ven influenciadas por un conjunto de intereses que corresponden a distintos actores que conforman el Estado. Unos intereses tratarán de primar sobre otros lo que llevan a generar sectores excluidos. Al existir un conjunto de diversos intereses, la Escuela analiza que la seguridad no solo corresponde a un solo tema, sino hay que expandir el análisis a un espacio multidimensional, es decir, la amenaza no solo se restringe a un hecho militar o de violencia, se pretenderá preservar la integridad del Estado, así como su identidad, cultura, tradiciones y expresiones artísticas.

Es por esto que en el último siglo la concepción de seguridad se incorporó a los estamentos políticos en pro del bienestar de la sociedad, por ejemplo, “la historia de mediados del siglo XX es la historia donde el concepto de ‘seguridad’ se difundió mundialmente, gracias a la posición política de Estados Unidos, que lo eligió como su concepto clave” (Waever, 2004, p. 74).

Estados Unidos adoptó una política en la que prevalece la lucha contra lo que considera amenazas potenciales para su población, es por esto que a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001, su discurso se intensificó, clasificando a las amenazas como posibles terroristas, por lo que tomó medidas radicales en varios temas, entre ellos la migración. En este aspecto, las dinámicas migratorias que habían sido toleradas y de aspectos comunes, se sobredimensionaron en la noción de amenaza y de seguridad nacional que emplearon varios países en Europa y América para tratar el tema de la migración irregular, sin tener en cuenta aspectos que fuerzan las actuales dinámicas migratorias.

Los factores generadores de migración en los países de origen se destacan por limitar el estado de bienestar y los derechos humanos de la población. Para el caso del Triángulo Norte, se ha evidenciado que los países que conforman esta integración (Honduras, Guatemala y El Salvador) presentan simetrías en la forma de gobierno, es decir, su historia política ha sido antecedida por gobiernos dictatoriales y militares, seguidos por representaciones democráticas que lamentablemente se han visto señaladas por hechos de corrupción, lo que ha determinado la inestabilidad política actual y la poca confianza institucional por parte de la población civil.

Otra similitud radica en el retroceso económico que se ha presentado en los últimos años en estos países, o los altos índices de pobreza en países como Honduras, en el que

66,2 % de la población se ubica por debajo de la línea de pobreza, así como en El Salvador, donde el 48% de la población es pobre (Banco Mundial, 2010). Adicionalmente, se muestra la inestabilidad macroeconómica, por una parte la productividad es baja, y por otra, la inflación y el desempleo son altos, lo que a su vez provoca que la población en edad de trabajar opte por abandonar su lugar de origen en busca de mejores oportunidades.

Por último, las dinámicas migratorias centroamericanas obedecen a dos factores relevantes: el primero, el factor laboral y segundo la violencia a causa del crimen organizado.

El promedio de desempleo de la región centroamericana en la población joven de 15 a 25 años fue de 9,5 % en el año 2011. El Salvador tuvo una tasa de desempleo para esta población de 8,2 %, Guatemala de 7,5 % y Honduras de 7,1 %; el país con la tasa de desempleo joven más alta en la región es República Dominicana 12,1 %. Es importante señalar que la población joven tiene grandes dificultades para acceder al mercado laboral. Esto ha provocado que el perfil migratorio del Triángulo Norte obedezca a población joven en edad de trabajar entre 15 a 30 años de edad.

Por otra parte, el crimen organizado se da a través de extorciones, amenazas, violaciones, asesinatos, reclutamiento forzado, etc., los cuales se vinculan con las pandillas transnacionales, ya que los narcotraficantes que operan en Centroamérica aprovechan la red delincuencia de las pandillas, y estas a su vez ofrecen sus servicios en territorios específicos que les generan más ventajas.

Por tanto, estas esferas delictivas se han convertido en un problema de seguridad nacional para estos países centroamericanos. “Es evidente el impacto

significativo que tiene ser víctima de la delincuencia y la corrupción sobre la probabilidad de que un individuo planea migrar en el futuro cercano” (LAPOP, 2014, p. 6).

De igual manera, la articulación de las pandillas o maras con las mafias transnacionales se desarrollaron debido a dos factores. En primer lugar, la expansión de redes de narcotráfico por Centroamérica, debido a las políticas de control intensificadas por México. En segundo lugar, la adopción de políticas temerarias de mano dura por parte de los países del Triángulo Norte, fomentó dicha articulación.

En contraste a la porosidad fronteriza de esta región, se vincula la trata de personas que estrechamente se relaciona con el tránsito ilegal de migrantes, los cuales son víctimas de violencia sexual, trabajo forzado, extorsiones, etc., por lo que las organizaciones criminales fueron enlazando todas las acciones delictivas y generando una red transnacional en la que los negocios ilícitos se lucran al pasar de frontera en frontera. Según, Benítez, citado por Santamaría (2013),

[...] en el caso de la sub-región México-Centroamérica, la trata de personas y el tráfico ilícito de personas con rasgos transnacionales se concentra sobre todo en el Estado de Chiapas, en la zona fronteriza entre México y Guatemala, así como en el corredor migratorio conformado por los estados de Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas en México (p. 9).

Los factores anteriores indican la situación de los países del Triángulo, lo cual ha generado que la población opte por migrar en pro de mejorar su calidad de vida. Según Pew Hispanic Center los migrantes irregulares que viven en los Estados Unidos se han triplicado desde 1990 (3,5 millones), a 8,4 millones en el 2000 y 11,1 millones en 2011, representando el 13 % de la población total.

Ante esta situación, Estados Unidos y los países del Triángulo han formado iniciativas para luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico. Sin embargo, estas iniciativas no han dado los resultados esperados, ya que el objetivo estadounidense, como se ha mencionado, se enfoca solo en la seguridad, y esto deja en entre dicho el actuar norteamericano: sus iniciativas no plantean soluciones de fondo en los países centroamericanos, ni soluciones frente al fenómeno migratorio.

El mayor desafío de las migraciones transnacionales es político, por tanto se generan dos espacios de discusión: por un lado, en cómo adelantar derechos políticos en los migrantes que garanticen el desarrollo de sus capacidades, sus deberes y derechos en los distintos territorios por los que transitan y habitan. Por otro lado, tiene que ver con las diversas respuestas que los Estados deben encontrar de cara a las relaciones de interdependencia para contrarrestar las tendencias securitizadoras que predominan cada vez más a nivel global (Morales, 2003).

La ausencia de una visión internacional sobre el tema migratorio ha generado que las relaciones pierdan su enfoque integral, ya que el proceso de securitización, que se presenta en Estados Unidos, determina las medidas que llevará a cabo para garantizar la seguridad nacional, así como las decisiones sobre las políticas financieras y sociales, para limitar el accionar de posibles amenazas sobre su territorio, en las que se ven afectados en ciertos aspectos poblaciones particulares y sus derechos básicos.

Las reformas migratorias han tenido como objetivo la incorporación de inmigrantes al país de forma temporal, reformas con las que puedan desempeñar actividades laborales de importancia para el país en el sector agrícola. Sin embargo, la percepción de estas

nuevas tendencias migratorias en territorio americano ponen en juego las nociones de identidad nacional para los más tradicionalistas.

Ello se evidencia en la propuesta a la reforma migratoria patrocinada por George W. Bush, en la que solo se permitiría la naturalización de los inmigrantes irregulares para ser trabajadores temporales, además de cumplir con diferentes requisitos entre los que se encontraban un pago de multas altamente costosas que limitaban el accionar del migrante. Estos requisitos, son muestra de la poca iniciativa sobre el pensar de la situación del migrante. Por otra parte, se observa, que en los estatutos de la reforma los objetivos imperantes eran incrementar la seguridad fronteriza y la ejecución de las leyes al interior del país.

Para el Gobierno norteamericano la situación migratoria es aceptada y conocida por toda la población, sin embargo, el señalamiento de criminal hacia el migrante ha ocasionado que las reformas no pasen más allá de los debates en Cámara, puesto que se tienen como argumentos en contra a esta: la aplicación de la amnistía, ya que no pueden permitir que personas que han infligido la ley puedan acceder a los beneficios de un ciudadano americano y, a su vez, la amnistía impulsaría el aumento de oleadas de inmigración ilegal. Otro argumento es que al regularizar a los indocumentados se produciría un aumento del gasto público al crecer la demanda de educación, servicios de salud, vivienda, etc.

Respecto a la reforma que se trata actualmente en el Congreso norteamericano, las condiciones siguen bajo el lineamiento de que el migrante debe amoldarse a la cultura norteamericana, evitando políticas multiculturales, ya que se busca homogenizar la

sociedad para evitar disparates que atenten contra la riqueza, cultura, la identidad y la seguridad nacional, que en últimas están siendo amenazadas por la migración.

Se observó que las políticas migratorias estadounidenses se discuten en un entorno en el que las soluciones son problemáticas para muchos sectores, entre los que se destacan los grupos antiinmigrantes y los congresistas republicanos, quienes representan estigmas excluyentes y racistas que terminan discriminando a la población latina, limitando sus derechos humanos.

La visión del Gobierno norteamericano está completamente sesgada en el espacio de seguridad y de todo lo que representa una amenaza para su territorio. Las intenciones de integrar y cohesionar su población, se desenvuelven bajo una temática netamente securitiva y política, puesto que se están tomando medidas unilaterales, deteriorando la situación de los inmigrantes irregulares y las relaciones con sus países de origen.

Por consiguiente, con base en la retórica política las reformas migratorias se han politizado. En primer lugar, en el periodo de elecciones bastantes legisladores estarán en campaña buscando su reelección, ya que el grupo latino se convirtió en el 13 % de posibles electores determinantes para la elección de candidatos demócratas o republicanos.

En segundo lugar, los procesos de adopción de las políticas migratorias abarcan la implementación de medidas coercitivas, como las redadas, deportaciones, y persecuciones en lugares de trabajo, que se han incrementado en los estados receptores de inmigrantes, como Texas y Arizona, debido a la implementación de los agentes fronterizos, y personal del Immigration and Customs Enforcement, lo que ha generado entre la población migrante temor hacia la ley del miedo representada en el aumento de medidas agresivas y detenciones arbitrarias.

De lo anterior se puede advertir que el descontento en la población latina, en particular la que se encuentra residente en Estados Unidos de manera ilegal, se deriva no de un apartamiento por parte de las políticas del Estado en aras de regular su situación, sino que más bien viene de la imposibilidad de ver materializadas las propuestas de campaña que llevaron a Barack Obama a la Casa Blanca. Es decir, que la población ilegal en Estados Unidos muestra un descontento frente a situaciones que ni siquiera son de la absoluta potestad del presidente de Estados Unidos, puesto que como ya se ha explicado la regulación de las políticas migratorias es una facultad que se encuentra en cabeza del órgano legislativo norteamericano.

En tercer lugar, la polarización del migrante en la sociedad americana refleja cómo se ha utilizado su imagen para manipular ciertas instancias decisivas. Por tanto, las acciones políticas estadounidenses frente a la migración evidencian claras contradicciones, aunque se quiera regularizar el fenómeno, el estatus que tiene el inmigrante de criminal genera prejuicio en el desarrollo de la propuesta ante los legislativos y la opinión pública.

Por consiguiente, la securitización de las políticas migratorias estadounidenses va en contra de los principios de protección de los migrantes, así como también se asocia a la lucha contra el tráfico de drogas y las organizaciones criminales que en últimas se vinculan con la migración irregular. Esta doctrina de seguridad nacional, ha relacionado que las amenazas externas incluyen la posible participación de la población inmigrante que vive o transita por Estados Unidos.

Según Rodríguez et al. (2011), lo anterior aumentó la vulnerabilidad de los migrantes centroamericanos haciendo más atractiva la creación de un mercado ilícito de

trata de personas, lo que en conjunto con los factores descritos han generado condiciones propicias para la difusión de las redes criminales en la región.

Esta situación refleja que la gravedad y complejidad de los problemas de seguridad (maras, narcotráfico, crimen organizado) existentes en los países de origen han adquirido un carácter transnacional, lo cual, ha generado una disyuntiva política en el escenario migratorio estadounidense, de acuerdo con el planteamiento de las reformas migratorias con base en la seguridad como principal motor de esta, o por el contrario, con la aceptación de cientos de migrantes irregulares.

Por último, se identificó que aun con la implementación de las políticas migratorias no han surgido efectos que generen la deserción de los inmigrantes por cruzar la frontera sur. Desde la reforma IIRAIRA de 1996 hasta las más recientes reformas se han implementado toda clase de mecanismos para el control fronterizo: “el aumento en la vigilancia y en la militarización de la frontera no ha tenido un efecto significativo en los planes de las personas que piensan cruzar sin documentos la frontera con Estados Unidos” (CNDH, 2009)

Según datos oficiales, en 2012 40,4 millones de inmigrantes vivían en Estados Unidos, lo que representó el 13 % de la población total, en 2014 la población inmigrante representó el 55,3 millones de la población total estadounidense, y más de 11 millones están en el país sin autorización en comparación con los 12,2 millones del año 2007. De acuerdo con Migration Policy Center (2010) el 97 % de los inmigrantes logra entrar eventualmente a territorio estadounidense, y el 45 % de los inmigrantes es capturado por lo menos una vez en su intento.

Queda entonces preguntarse hasta qué punto una sociedad como la estadounidense, que necesita la mano de obra inmigrante para su aparato productivo, puede continuar con un discurso que relaciona la cuestión migratoria con pobreza, delincuencia e ilegalidad, y que está íntimamente ligado a políticas basadas en la inquietud y la violencia.

Referencias

Alba, F., y Leite, P. (2004). Políticas migratorias después del 11 de septiembre: los casos del TLCAN y la UE. *Migración y Desarrollo*, (2), 4-20.

ACAPS. (2014). Otras situaciones de violencia en el Triángulo Norte Centroamericano.

Recuperado de

http://www.iecah.org/web/images/stories/Otras_situaciones_de_violencia_ACAPS_Mayo_2014.pdf

ACNUR. (2012). Desplazamiento forzado y necesidades de protección, generados por nuevas formas de violencia y criminalidad en Centroamérica. Recuperado de

<http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2012/8932.pdf?view=1>

Alvarenga, D., Arias, J., y Díaz, G. (2013). *Las reformas migratorias de Estados Unidos de América y sus repercusiones en los migrantes salvadoreños 2004-2011*. San Salvador: Universidad de El Salvador.

Arango, J. (2003). La explicación teórica de las migraciones: luz y sombra. *Revista Migración y Desarrollo*, 1.

Banco Mundial. (2010). Crimen y violencia en Centroamérica. Volumen II. Recuperado de

http://siteresources.worldbank.org/INTLAC/Resources/Sp_Volume_II_Crime_and_Violence_Central_America.pdf

Bigo, D. (2009). Sécurité et immigration: vers une gouvernamentalité par l'inquiétude?

Culture y Conflits, (31).

Blanco, C. (2000). Las migraciones contemporáneas. En *Ciencias Sociales*. Madrid:

Alianza.

- Beltrán, A. (2015). ¿Qué aprobó el Congreso estadounidense para Centroamérica en el presupuesto de 2016? Recuperado de <https://www.wola.org/es/analisis/que-aprobo-el-congreso-estadounidense-para-centroamerica-en-el-presupuesto-de-2016/>
- Benítez, R. (2011). México, Centroamérica y Estados Unidos: migración y seguridad. *Migración y seguridad: nuevo desafío en México*, (10), 179-192.
- Boggione, S. (2012). Globalization, International Migrations and Security. *Revista Gestión de las Personas y Tecnología*, 13, 18-29.
- Bourdieu, P., y Wacquant, L. (2008). *Una invitación a la sociología reflexiva*. Buenos aires: Siglo XXI.
- Bush, G. (2006). Seguridad de la frontera y reforma de inmigración. Washington: Prensa Presidencial.
- Buzan, B., et al. (1991). New Patterns of Global Security in the Twenty-first Century. *International Affairs*, 67(3), 431-451.
- Buzan, B., Waever, O., y Wilde, J. (1998). *Security: A New Framework for Analysis*. London: Lynne Rienner Publishers.
- Buzan, B., et al. (2008). People, States & Fear: An Agenda for International Security Studies in the post-Cold War Era. *Revista Académica de Relaciones Internacionales*, 9. Madrid: Universidad Autónoma de Madrid-GERI.
- Cámara de Comercio de México-Estados Unidos. (2011). México cooperación en seguridad. Recuperado de <http://www.usmcoc.org/papers-current/1-EE%20UU-Mexico-Cooperacion-en-Seguridad.pdf>
- Carvajal, L. (2009). Posmodernismo y constructivismo: su utilidad para analizar la política exterior colombiana. *Oasis*, (14), 200-2018.

- Cáceres, R. (2010). La interdependencia de la democracia y los procesos de integración. *Revista de Derecho*, 31 (1), 5-25.
- Castañeda, A. (2012). *La violencia de la ley: la legislación migratoria y el proceso de deportación*. (s.d.).
- CEPAL. (2006). Migración internacional, derechos humanos y desarrollo en América Latina y el Caribe. Trigésimo primer período de sesiones, Montevideo, Uruguay. Recuperado de <http://www.cepal.org/publicaciones/xml/0/24020/DGE-2303%28SES.31-11%29-Migracion-Web.pdf>
- Cerda, J. (2014). Las familias transnacionales. *Revista Espacios Transnacionales*, (2), 78-88. Recuperado de <http://espaciostransnacionales.org/wp-content/uploads/2014/11/6-Familias-Transnac.pdf>
- Coalición Centroamérica Democrática. (2015). Corrupción e impunidad en el triángulo norte. El Salvador, Guatemala y Honduras. Recuperado de <http://coalicioncad.org/media/uploads/documents/impunidad-guatemala-1.pdf>
- Chabat, J. (2010). *La iniciativa Merida y la relación México-Estados Unidos: en busca de la confianza perdida*. México: Publicaciones CIDE.
- Comisión Nacional de Derechos Humanos. (2009). Políticas antiinmigrantes en Estados Unidos. Recuperado de <http://200.33.14.34:1033/archivos/pdfs/acosoPolíticasAntiinmigrantesEU.pdf>
- Departamento de Estado, Oficina de asuntos del hemisferio occidental. (2012). La iniciativa regional de seguridad para América Central: niveles más altos de cooperación y coordinación. Recuperado de <http://www.state.gov/documents/organization/194652.pdf>

- Escobar, S., y Toledo, E. (2010). *Hacia una relación México-Estados Unidos: diez tesis migrantes*. México. Recuperado de <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/mexiko/08123.pdf>
- Federación Internacional de los Derechos Humanos. (2008). Estados Unidos-México. Muro, abusos y muertos en las fronteras. IV foro internacional Democracia y Cooperación. Recuperado de http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?entidad=Textos&id=5316&opcion=documento#ficha_gloobal
- Frasson-Quenoz, F. (2015). *Autores y teorías de Relaciones Internacionales: una cartografía*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- Gelatt, J. (2005). Bush puts immigration reform back on agenda, approves funding for DHS. Recuperado de <http://www.migrationpolicy.org/article/bush-puts-immigration-reform-back-agenda-approves-funding-dhs>
- Goldring, L. (1992). Difuminando fronteras: construcción de la comunidad transnacional en el proceso migratorio México-Estados Unidos. *Migración Laboral Internacional. Transnacionalidad del espacio social*. Puebla, Autonomus University of Puebla.
- González, G. (2013). La migración centroamericana en su tránsito por México hacia los Estados Unidos. *Revista Alegatos*, (83), 169-194.
- Human Rights Watch. (2007). Separación forzosa, deportaciones desde Estados Unidos violan los derechos humanos. Recuperado de https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/us0707brochureweb_sp_0.pdf.

- Hernández, D. (2008). Política migratoria y de control fronterizo de Estados Unidos hacia México y Centroamérica. *Revista de ciencia política y administración pública*, VI(8), 193-214. Recuperado de <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=96060811>
- Herrera, L., González, D., y Rocha, T. (2009). *La política migratoria en el nuevo escenario político de Estados Unidos*. Hamburgo: Consejo nacional de población. Recuperado de http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/migracion_internacional/politicaspublicas/11.pdf
- Immigrant Legal Resource Center. *The Dream Act (2007)*. Recuperado de <http://www.ilrc.org/para-inmigrantes/dream-act-espa-ol>
- Kerosky, B. (2010). *¿Por qué muchos inmigrantes han sido arrestados por la oficina de aduana ICE?* Recuperado de <http://www.youradwokate.com/spanish/articles/2/PORQUE-MUCHOS-INMIGRANTES-HAN-SIDO-ARRESTADOS-POR-LA-OFICINA-DE-ADUANAS-E-INMIGRACION-ICE.pdf>
- Lallande, J. (s.f.). Teorías positivistas y críticas de las relaciones internacionales: realismo y Constructivismo en la cooperación internacional. En P. Arellanes (Coord.) *Teorías de relaciones internacionales y aplicación práctica*. México: BUAP-Montiel & Soriano.
- LAPOP. (2014). Perspectivas desde el barómetro de las Américas. *Violencia y migración en Centroamérica*, (101). Recuperado de <http://www.vanderbilt.edu/lapop/insights/IO901es.pdf>

- Lowenthal, A. (2007). Estados Unidos y América Latina a inicios del siglo XXI. En Foreign Affairs. Recuperado de http://fes-seguridadregional.org/images/stories/docs/3788-001_g.pdf
- Massey, D. (2012). La guerra de los Estados Unidos contra la inmigración. Efectos paradójicos. En *Documents d'Anàlisi Geogràfica*, 59(2).
- Massey, D., et al. (1998). Una evaluación de la teoría de la migración internacional: el caso de América del Norte. En *Cruzando fronteras: migraciones en el sistema mundial*. Barcelona: Fundación Hogar del Empleado
- Massey, D., Pren. K., y Durand, J. (2009). Nuevos escenarios de la migración México-Estados Unidos. Las consecuencias de la guerra antiinmigrante. *Papeles de Población*, (61), 101-128.
- Mercer, J. (1995). Anarchy and identity. *International Organization*, 49(2), 231-232.
- Micolta, A. (2005). Teorías y conceptos asociados al estudio de las migraciones internacionales. *Revista de Trabajo Social*, (7), 59-76.
- Migration Policy Institute. (2010). Immigration and the United states: Recession Affects Flows, Porspects for Reform. Nueva York: Kristen McCabe.
- Migration Policy Institute. (2010). Inmigrantes Centroamericanos en los Estados Unidos. Nueva York: Terrazas Aaron.
- Moller, B. (2000). Seguridad nacional, societal y humana: el marco general y el caso de los Balcanes. *Fasoc*, (4), 3-28.
- Morales, A. (2003). Globalización y migraciones transfronterizas en Centroamérica. *LiminaR. Estudios Sociales y Humanísticos*, 1(1), 45-68.

Moreno, S. (2013). La reforma migratoria en los Estados Unidos. Posibilidades y alcances.

Centro de Estudios Sociales y de opinión Pública, (161). Recuperado de

http://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/ois_yb_2013_0.pdf

Nagore, L., y Silva, S. (2008). Políticas migratorias en nombre de la cohesión social.

Papeles de relaciones ecosociales y cambio global, 53-62. Recuperado de

<http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2652754>

Obama, B. (2014). Obama's full speech on migration. Univisión noticias. Recuperado de

<http://www.univision.com/noticias/inmigracion/obamas-full-speech-on-immigration>

Organización Internacional del Trabajo. (2014). *Situación de la formación profesional en*

Centroamérica y República Dominicana: 1998-2013. Costa Rica: Alely

Pinto

Ordaz, J., y Albo, A. (2011). *La migración en Arizona y los efectos de la Nueva Ley "SB-*

1070". Fundación BBVA Bancomer-BBVA Research. México D. F.

Ordaz, J. (2013). *¿A quién beneficiará la reforma migratoria en Estados Unidos?*

Fundación BBVA Bancomer-BBVA Research. México D. F.

Orozco, M., y Malloy, M. (2012). *Tendencias y asuntos políticos que repercuten en México*

y los países centroamericanos. Mirando al norte: algunas tendencias de la migración Latinoamericana. San José: Flacso.

Paredes, J. (2012). El decisivo voto hispano en las elecciones presidenciales de Estados

Unidos. *Lopinió*, (16). Recuperado de

http://www.fcampalans.cat/uploads/activitats/pdf/frc_l_opinio_16.pdf

- Perni, O. (2001). *Migration Flows, Societal Security and EU's Integration Process. The Spanish Case*. Institut Universitari d'Etudis Europeus. Working paper 17.
- Pew Hispanic Center. (2008). The Hispanic Vote in the 2008 Election. Washington: Lopez Mark. Recuperado de <http://www.pewhispanic.org/files/reports/98.pdf>
- Pew Hispanic Center. (2014). Unauthorized Immigrant Population Trends for States, Birth Countries and Regions. Recuperado de <http://www.pewhispanic.org/2014/12/11/unauthorized-trends/#All>
- Pew Hispanic Center. (2015). Statistical Portrait of Hispanics in the United States, 1980-2013. *English Proficiency on the Rise Among Latinos*. Washington: Stepler Renee, Brown Anna.
- Quasten, A. (2013). *Superación de la crisis de seguridad en el triángulo norte de Centroamérica. Posibilidades y necesidades de una intervención internacional*. Bogotá: Friedrich Ebert Stiftung.
- Quintero, E. (2014). La teoría constructivista en las relaciones internacionales y la escuela de Copenhague: la ampliación al concepto de seguridad de las Américas. *Revista Análisis Internacional*, 5(2). 77-85.
- Rodríguez, E., Berumen, S., y Ramos, L. (2011). Migración centroamericana de tránsito irregular por México. Estimaciones y características generales. *Apuntes sobre migración*. México. Recuperado de http://www.oxfammexico.org/wp-content/uploads/2013/06/APUNTES_N1_Jul2011.pdf
- Santamaría, G. (2013). *La difusión y contención del crimen organizado en la subregión México-Centroamérica*. Washington: Wilson Center: Latin American Program.

Summary of Security Through Regularized Immigration and a Vibrant Economy Act of

2007 (Strive ACT of 2007). Recuperado de

http://www.nafsa.org/_/File/_/strive_summary.pdf

Triángulo Norte: Construyendo confianza, creando oportunidades. Acciones estratégicas

del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. Recuperado de

<https://www.un.int/honduras/sites/www.un.int/files/Honduras/1->

[acciones_estrategicas_del_plan_de_la_alianza_para_la_prosperidad_del_triangulo_](https://www.un.int/honduras/sites/www.un.int/files/Honduras/1-acciones_estrategicas_del_plan_de_la_alianza_para_la_prosperidad_del_triangulo_norte_folleto_07abril20151.pdf)

[norte_folleto_07abril20151.pdf](https://www.un.int/honduras/sites/www.un.int/files/Honduras/1-acciones_estrategicas_del_plan_de_la_alianza_para_la_prosperidad_del_triangulo_norte_folleto_07abril20151.pdf)

UNODC. (2012). Delincuencia organizada transnacional en Centroamérica y el Caribe.

Recuperado de [https://www.unodc.org/documents/data-and-](https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/TOC_Central_America_and_the_Caribbean_spanish.pdf)

[analysis/Studies/TOC_Central_America_and_the_Caribbean_spanish.pdf](https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/Studies/TOC_Central_America_and_the_Caribbean_spanish.pdf) Vereá, M.

U.S. Department Of State. Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental (2012). *Central*

America Regional Security Initiative (CARSI). Washington.

U.S. Citizenship and Immigration Services (2015). *Executive Actions on Immigration*

(DAPA). Recuperado de <https://www.uscis.gov/immigrationaction>

Vanneph, A. (2013). *Frontera norte: de las redes a la región transfronteriza. Las fronteras*

del Istmo. México: CIESAS.

Vélez, F. (s.f.). Migraciones y seguridad. *Revista AFESE* 48, 2(27), 95-104. Recuperado de

<http://www.afese.com/img/revistas/revista48/migraseguridad.pdf>

Vereá, M. (2014). El congreso estadounidense y Obama: propuestas, posiciones y acciones

ante el fracaso de una reforma migratoria integral. *Carta Económica Regional*,

(114). 41-65.

- Villaseñor, B., y Morena, J. (2002). Breve visión sobre las medidas de control migratorias en la Frontera Norte de México. En *Migración: México entre sus dos fronteras, 2000-2001*, 6-21. Recuperado de <http://bibliotecadigital.conevyt.org.mx/colecciones/documentos/migracion.html>
- Vitelli, M. (2014). Veinte años de constructivismo en relaciones internacionales. Del debate metateórico al desarrollo de investigaciones empíricas: una perspectiva sin un marco de política exterior. *PostData*, 19(1), 129-163.
- Waeber, O. (2004). *Paz y seguridad: dos conceptos en evolución y su relación cambiante*. Capítulo 1. Análisis contemporáneo de seguridad e investigación para la paz en Copenhague.
- Waeber, O. (2004). *New Schools in Security Theory and their Origins between Core and Periphery*. Montreal: International Studies Association.
- Warren, R. (1994). Estimates of the Unauthorized Immigrant Population Residing in the United States, by Country of Origin and State of Residence: October 1992. U.S. *Immigration and Naturalization Service*. Recuperado de http://www.dhs.gov/xlibrary/assets/statistics/publications/Ill_Report_1211.pdf
- Wendt, A. (1992). Anarchy is What States Make of it: The Social Construction of Power Politics. 46(2), 391-425.
- Wendt, A. (1999). *Social Theory of International Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- White House Office of Communications. Policies of the Bush Administration 2001-2009. Recuperado de <https://georgewbush->

whitehouse.archives.gov/infocus/bushrecord/documents/Policies_of_the_Bush_Administration.pdf